

LA BIBLIOTECA EDITORIAL

C O N E X I O N E S

LIBROS

**Una historia transnacional del libro
en América Latina, 1870-1920**

Juan David MURILLO SANDOVAL

Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Villa María
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Conexiones libreras

Juan David MURILLO SANDOVAL

Conexiones libreras

**Una historia transnacional del libro
en América Latina, 1870-1920**

Universidad de los Andes

Universidad Nacional de Villa María

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Nombre: Murillo Sandoval, Juan David, autor.

Título: Conexiones libreras: una historia transnacional del libro en América Latina, 1870-1920 / Juan David Murillo Sandoval.

Descripción: Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes ; Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Editorial UD ; Villa María, Córdoba: Universidad Nacional de Villa María, Eduvim ; Santiago : Pontificia Universidad Católica de Chile, Ediciones UC 2025. | 478 páginas: ilustraciones; 16 × 21 cm. | Colección La Biblioteca Editorial

Identificadores: ISBN 978-958-798-878-9 (rústica) | 978-958-798-879-6 (e-book) | 978-958-798-880-2 (e-pub)

Materias: Imprenta – Historia – América Latina | Bibliotecas – Historia – América Latina | Industria editorial – Historia – América Latina

Clasificación: CDD 686.209 –dc23

SBUA

Primera edición: septiembre del 2025

© Juan David Murillo Sandoval

© Universidad de los Andes, Vicerrectoría de Investigación y Creación, Ediciones Uniandes; Universidad Nacional de Villa María, Eduvim; Pontificia Universidad Católica de Chile, Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural, Ediciones UC; Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Editorial UD

Ediciones Uniandes
Carrera 1.ª n.º 18A-12, bloque Tm
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (601) 3394949, ext. 2133
<https://ediciones.uniandes.edu.co>
ediciones@uniandes.edu.co

Editorial Universitaria Villa María (Eduvim)
Entre Ríos 1421
Villa María, Córdoba, Argentina
Teléfono: (54) 0353 464 8245
<https://www.eduvim.com.ar>

Ediciones Universidad Católica de Chile
Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390
Santiago, Chile
<https://lea.uc.cl>
editorialedicionesuc@uc.cl

Editorial UD
Carrera 24 n.º 34-37
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (601) 3239300, ext. 6202
<https://editorial.udistrital.edu.co>
publicaciones@udistrital.edu.co

ISBN: 978-958-798-878-9
ISBN e-book: 978-958-798-879-6
ISBN e-pub: 978-958-798-880-2
DOI: <https://doi.org/10.51573/Andes.9789587988789>.
9789587988802

Edición: Emanuel Molina
Corrección: Diana López de Mesa
Diagramación: Samanta Sabogal
Diseño de cubierta: La Central de Diseño

Impresión
Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A. S.
Carrera 69H n.º 77-40
Teléfono: (601) 6020808
Bogotá, D. C., Colombia

Impreso en Colombia - Printed in Colombia



Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949, Minjusticia. Acreditación institucional de alta calidad, 10 años: Resolución 582 del 9 de enero del 2015, Mineducación.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Vigilada Mineducación. Acuerdo de creación n.º 10 de 1948 del Concejo de Bogotá. Acreditación institucional de alta calidad: Resolución n.º 023653 del 10 de diciembre del 2021.

Contenido

Agradecimientos 13

Introducción 17

El problema material de la comunicación intelectual 22

América Latina y el capitalismo de la edición 27

PRIMERA PARTE

LA GERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS EDITORIALES

1. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ESFERA TIPOGRÁFICA 41

Migraciones, saberes y modernización 42

Asociacionismo, conflicto y mecanización 52

Las imprentas nacionales y la autonomía editorial del Estado 61

2. LUGARES DEL SABER: LAS BIBLIOTECAS 81

Las bibliotecas centrales: acumulación y disposición 85

La dinámica adquisitiva: donaciones y canjes 88

El despegue del saber bibliotecario en Argentina y Chile 94

Saberes transferidos en la Biblioteca Nacional de Colombia 106

3. LUGARES DEL SABER: LAS LIBRERÍAS 117

Los orígenes internacionales de las librerías nacionales 121

Proyecciones educativas y posibilidades libreras 128

El momento de los catálogos: publicitación
y profesionalización 137

Especialización y jerarquización 148

4. EDITORES CON COLECCIONES 161

Laboratorios editoriales 163

Formadores de colecciones 175

Espacios editoriales, espacios de convivencias 193

SEGUNDA PARTE

UN ESPACIO INTERACTIVO: CONEXIONES
LIBRERAS EN AMÉRICA LATINA

5.	BIBLIOTECAS Y CONOCIMIENTO NACIONAL EN RED	213
	Canjes bibliográficos y conocimiento del otro	215
	De redes triangulares a continentales: aspiraciones y dificultades	225
	Efectos de una interacción: la transferencia de saberes nacionales	243
6.	CONEXIONES LIBRERAS	255
	Las redes bibliófilas de Carlos Casavalle	258
	Conexiones, viajes y negocios: el caso de Roberto Miranda	272
	Redes libreras y mercados conectados	290
7.	TRABAJO INTELECTUAL Y EDICIÓN TRANSNACIONAL	297
	La diplomacia literaria y editorial de José A. Soffia	300
	Poetas Hispano-Americanos: ascenso y caída de un proyecto editorial	320
	Literaturas municipales, ediciones continentales	337

TERCERA PARTE

EXPANSIONES Y CONTRACCIONES DE
LA EXPERIENCIA CONECTIVA

8.	EL MOMENTO TIPOGRÁFICO	349
	El amanecer de los órganos tipográficos	353
	Las revistas <i>gráficas</i> , entre pedagogía y organización	362
	Hacia una <i>internacional</i> gráfica	375
9.	LA CANALIZACIÓN IMPERIAL DEL INTERCAMBIO CULTURAL	391
	La deriva de la intermediación parisina	395

CONTENIDO

Los caminos del resurgimiento hispánico	406
La faceta editorial del panamericanismo	419
CONCLUSIONES	435
BIBLIOGRAFÍA	443
Archivos consultados	443
Periódicos	444
Referencias	446

Agradecimientos

La investigación que sustenta este libro fue posible gracias a la colaboración, estímulo y acompañamiento de muchas personas e instituciones, sea este el lugar para recordarlas con aprecio y cariño.

Una primera versión del proyecto surgió en el Grupo de Investigación Nación/Cultura/Memoria del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, y fue socializado en el Primer Congreso de Historia Intelectual de América Latina (2012). Las preguntas y observaciones recibidas por parte de los profesores Gilberto Loaiza y Lenin Flórez resultaron imprescindibles para el redimensionamiento del proyecto y la fijación de sus ambiciones.

Aceptado un año más tarde en el programa de Doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), el proyecto recibió el respaldo ininterrumpido de un número significativo de docentes, compañeros doctorandos y maestrandos del Instituto de Historia. Entre los primeros, agradezco especialmente a Joaquín Fermandois, Lucrecia Enríquez, Fernando Purcell, Alfredo Riquelme, Claudio Rolle, Rafael Sagredo y Sol Serrano, con quienes pude compartir cursos, seminarios y eventos académicos. Desde la coordinación de posgrados del Instituto, Javiera Müller y Verónica Undurraga brindaron un apoyo irrestricto para el buen avance de la investigación. Asimismo, agradezco a Pablo Whipple, mi director de tesis, quien aportó provechosas observaciones, críticas y sugerencias que sumaron al perfeccionamiento de la investigación.

Respecto de los segundos, faltarán palabras para agradecer a aquellas personas que contribuyeron a enriquecer no solamente la vida académica,

sino también a iluminar los días y las noches en un país no siempre amable con el extranjero. Así, en la misión de alegrar mi momento chileno, no puedo dejar de recordar a Mauricio Gómez, Francisca Leiva, Macarena Ríos y Sebastián Hernández. Mis espléndidas amigas y compañeras, Laura Fahrenkrog, Vanessa Moraes Pacheco y Leonor Riesco hicieron de cada encuentro y conversación un momento valioso.

Entre las instituciones que ayudaron al adelanto de esta investigación, agradezco en primer lugar a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID). El apoyo del Colegio de Programas Doctorales UC fue determinante para muchas actividades complementarias. Del mismo modo, debo agradecer al personal de la Biblioteca de Humanidades de la PUC y de la Biblioteca Nacional de Chile, entre estos especialmente a Jimena Rosenkranz.

Una pasantía llevada a cabo en Argentina me permitió entrar en contacto con núcleos de investigación que me ayudaron a fortalecer varios aspectos de este trabajo. En el Idacor de la Universidad Nacional de Córdoba tuve la fortuna de discutir avances con Gustavo Sorá y Ezequiel Grisendi. En la Biblioteca Mayor de esta misma ciudad, Alfonsina Panatteri me brindó acceso a fuentes inexistentes en otros lugares. En Buenos Aires conté con la colaboración de Alejandro E. Parada en la Academia Argentina de Letras y también con la asesoría de Horacio Tarcus y el personal del CEDINCI, dos instituciones cuyos acervos hicieron posible la reconstrucción de parte de la vida tipográfica argentina en el periodo entre siglos. Debo agradecer por igual al personal de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y del Archivo General de la Nación.

En Colombia, Camilo Páez me proporcionó acceso a los archivos de la Biblioteca Nacional. Los capítulos dedicados a este lugar no se hubieran escrito sin esta facilidad. Los responsables de la sala de Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia me permitieron asimismo la consulta de materiales vitales en la reconstrucción de varias trayectorias librero-editoriales.

En el 2016, una pasantía realizada en la Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines me permitió trabajar en el Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC). Allí recibí la guía de Jean-Yves

Mollier, con quien discutí los objetivos del trabajo y sus potenciales resultados. También en Francia debo agradecer al personal de los Archives Nationales, la Bibliothèque Nationale, especialmente a las bibliotecarias de la Sala T., y a todo el equipo del Institut Mémoire de l'Édition Contemporaine (IMEC) en Caen.

Avances de esta investigación se presentaron en diversos congresos internacionales. Dos eventos en México me permitieron entrar en contacto con Arnulfo Uriel de Santiago y Marina Garone, así como conocer a colegas brasileños como Nelson Schapochnik, Mariana de Moraes Silveira y Marisa Midori Deaecto. La colaboración de todos me condujo a dimensionar el tamaño de la historiografía del libro mexicana y brasileña. Sea esta también la ocasión de reconocer su respaldo y amistad. En Alemania, una invitación de Esteban Morera y Thomas Fischer me dio la oportunidad de socializar avances en el Instituto Central de Estudios Latinoamericanos (ZILAS) de la Universität Eichstätt-Ingolstadt. Otros avances, materializados en artículos, se publicaron en revistas como *Araucaria; Información, cultura y sociedad*, y *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*. Una contribución adicional apareció en *Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales latinoamericanos en el siglo xx*, volumen compilado por Aimer Granados y Sebastián Rivera Mir. Mis agradecimientos también para ellos.

Desde orillas menos académicas, Viviana Arce, Nicolás Arenas, José Bozzo, Felipe Delgado Valdivia, Javiera Ducoing, Diana Henao Holguín, Aura Hurtado, Raúl Morales, Jorge Muñoz Sougarret, Andrés Nilo, Viviana Olave, Cielo Ospina, Alba Sepúlveda, Giselle Torres y toda la generosa familia De la Rosa Reyes de Valparaíso sumaron al desarrollo de este libro.

Por último, el amor de Claudia de la Rosa me dio la fuerza necesaria para un recorrido que empezaba a hacerse extenso. Para ella todo el amor de vuelta.

Introducción

A mediados de la década de 1850, Benjamín Vicuña Mackenna dejó registrada en su diario una serie de impresiones sobre la ciudad de Buenos Aires. En una de ellas, lamentaba que la biblioteca pública de la ciudad, «establecimiento arruinado también por Rosas i saqueado por Angelis», apenas tuviese alrededor de una docena de libros sobre «la América del Sud i de Chile». La ausencia de libros publicados en los países vecinos o que tratasen sobre ellos representaba para el todavía joven escritor chileno uno de los síntomas más graves de los males que aquejaban y dividían a las diferentes repúblicas americanas: el de la incomunicabilidad intelectual. Un sistema opuesto, señalaba, «sería una de las más poderosas palancas de salvación que pudiéramos tocar i el más fuerte lazo de unión que pudiera amarrar los despedazados fragmentos de la familia americana»¹.

En junio de 1869, el bibliotecario nacional chileno, Ramón Briseño, explicaba en carta a Ignacio Domeyko, su jefe en la Universidad de Chile, los beneficios civilizadores que contraía el poder compartir con los países vecinos la producción intelectual chilena. Animado por la posibilidad de dar forma a un sistema de canje de libros entre las bibliotecas de la región, Briseño listaba una serie de potenciales beneficios, como el enriquecimiento de las colecciones de la Biblioteca, el aumento del reconocimiento del país, el fomento de las relaciones literarias y científicas y el estímulo a los escritores locales. Al servir como «una especie de correspondencia de pueblo a

[1] Mackenna (1856: 396).

pueblo», explicaba, el sistema «cultivaría la ilustración i la fraternidad de las naciones americanas»².

Algunos años después, otro bibliotecario, el colombiano Nepomuceno J. Navarro, se dirigiría sobre este mismo asunto a los escritores de su país. Buscando recibir libros para canjear con otras bibliotecas, señalaba que en Colombia se sabía casi todo sobre el movimiento político, científico e industrial europeo, pero se ignoraba el correspondiente a la región. Este desconocimiento provenía, según remarcaba, de la falta de una «estrecha intimidad de aquellas naciones con la nuestra en asuntos científicos y literarios»³.

Manifestaciones como las anteriores pueden rastrearse con facilidad en años posteriores, e incluso durante episodios que parecían demostrar la reducción del problema. En 1883, Ernesto Quesada señaló en un discurso pronunciado en Río de Janeiro, y con motivo de la inauguración de la Asociación de Hombres de Letras del Brasil, acto al que había sido invitado junto con su padre, Vicente Gregorio, que a pesar de que las naciones americanas pertenecían a una misma raza y tenían, con «ligerísimas diferencias», la misma lengua, religión y costumbres, estas vivían en un aislamiento intelectual y material que causaba asombro: «ni saben recíprocamente lo que producen, ni lo que en ellas acontece, ni cuáles los hombres más notables de que se ufanan. Este estado de cosas constituye un verdadero crimen de leso americanismo»⁴.

Con una perspectiva similar, el mexicano Francisco Sosa observó en 1890 que los vínculos culturales no habían bastado para cimentar entre los países hispanoamericanos relaciones «capaces de mancomunar en un momento dado los intereses de todas ellas, para conservar el predominio de la raza, y para dejar incólume su independencia e íntegro su territorio». A esta alusión a las necesidades defensivas del continente, Sosa sumó una

[2] Carta de Ramón Briseño a Ignacio Domeyko, Santiago, 15 de junio de 1869, Archivo Nacional Histórico de Chile (ANH), Fondo Biblioteca Nacional de Chile, t. 10, ff. 26r-27v.

[3] Nepomuceno J. Navarro, «n.º 26. Circular dirigida a los escritores públicos y directores de establecimientos tipográficos», 28 de octubre de 1873, Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Archivo, t. 1[4], f. 147.

[4] Quesada (1883).

crítica a las guerras internas, así como la opinión del escritor chileno Leonardo Eliz, quien notaba que entre las repúblicas existía cierta indolencia y flojedad de relaciones que les impedía estimarse mejor desde el punto de vista de su desarrollo intelectual. Según expresaba, los países vivían extraños unos a otros, «ignorando hasta el nombre de las notabilidades que nos honran en la política, en las ciencias, en las artes, ¡en las letras!»⁵.

Todo este conjunto de quejas, lamentos y manifestaciones ilustran, evidentemente, un problema de larga data en la historia intelectual de América Latina: el de la incomunicación. Extendido hasta los siglos xx y xxi, este se palpa en los prospectos de numerosas revistas, en las razones de muchos proyectos americanistas, las intenciones de ferias y exposiciones del libro, los propósitos de los más sobresalientes proyectos editoriales vistos en la región y en no pocas narrativas sobre la integración o la cooperación regional⁶.

No obstante, estas mismas quejas, apenas una muestra de un repertorio mucho mayor, exponen una dimensión contradictoria, en la medida en que fueron expresadas en medio de circunstancias en las que parecían establecerse más conexiones que desconexiones. En lo fundamental, estas ocurrieron al calor de viajes internacionales, de libros extranjeros recibidos o de proyectos por establecer canjes entre bibliotecas. Las lamentaciones partían, además, de una serie de actores no solo interesados en luchar contra la ignorancia mutua, sino ya inmersos en prácticas de intercambio cultural a niveles supranacionales. Cómo fue que estos lograron establecer puentes entre los países de la región es una de las preguntas que este libro trata de responder. Más allá de las narrativas del aislamiento y la incomunicación, lo que muestran las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx es una seguidilla de episodios de conexión notables.

Reconocido como un periodo clave en la construcción estatal y nacional en América Latina, el largo entre siglos fue un momento de encuentros y solidaridades que ilustraron tanto la presencia de intereses y problemas

[5] Sosa (1890: III-VI).

[6] Piénsese en el Fondo de Cultura Económica, Siglo xxi o la Biblioteca Ayacucho, cuyo desarrollo buscó enfrentar los ensimismamientos nacionales y forjar un campo literario latinoamericano. Véanse Sorá (2017) y De Diego (2019: 53-79).

políticos y socioculturales comunes como de renovadas capacidades de conexión que acercaban a las comunidades letradas y académicas nacionales, capacidades alentadas por innovaciones en materia de transportes y variadas experiencias de movilidad. En las últimas tres décadas, la historiografía ha avanzado en la reconstrucción de muchos momentos de conexión desarrollados en este periodo, destacando a sus protagonistas, producciones e intereses y demostrando, ante todo, la ligazón entre los procesos de modernización y la efervescencia de la vida intelectual⁷.

Al centrar su atención en figuras rutilantes del espacio cultural latinoamericano, como José Martí, José Enrique Rodó o Rubén Darío, cuestiones como el pensamiento antiimperialista o la búsqueda de una estética propiamente americana han aparecido como las motivaciones detrás de muchos vínculos que, materializados en cruces de cartas y publicaciones, permitieron reunir producciones distantes entre sí, y poner en discusión distintas ideas de renovación o articulación cultural. El interés por estos procesos, que atraviesan los centenarios y se extienden más allá del movimiento de Reforma Universitaria iniciado en Córdoba en 1918, ha respondido, por supuesto, a su singularidad como experiencias que acusaron la presencia de nuevas y más activas generaciones que aspiraban a dar nuevos márgenes a la vieja ciudad letrada.

No obstante, en su interés por reconstruir estas formas de interacción intelectual, la mayoría de los estudios ha perdido de vista no solo la historicidad de los deseos de comunicación entre los países y sus comunidades letradas, sino también a quienes hicieron materialmente posible, gracias a la naturaleza de sus oficios, muchos de los intercambios establecidos. El arraigo del problema comunicativo al factor *libro*, siempre contemplado como producto clave en la circulación de las ideas y la promoción de una cultura nacional, delinea uno de los argumentos centrales de este libro: la creación de instancias de conexión transnacional en la región no fue una tarea exclusiva de los grandes elencos intelectuales. A pesar de que muchos fueron relevantes nodos de conexión, no fueron pocas las redes ni los intercambios

[7] Entre una larga lista de trabajos, resaltamos Zanetti (1994: 489-534), Beigel (2006), Devés-Valdés (2007) y Preuss (2016).

creados o estimulados por agentes del libro. En otras palabras, libreros, tipógrafos y bibliotecarios, entre otros agentes de la producción, circulación y recepción de libros e impresos, han sido omitidos en el estudio de la interacción intelectual.

Asociada con el interés que despierta la república continental de las letras, la omisión de los agentes del libro en el estudio de las conexiones señala una cierta apatía por identificar las condiciones materiales que favorecieron la comunicación intelectual, o mejor, por comprender, fehacientemente, cómo las ideas y los saberes se desplazaron de un lugar a otro. El desinterés por los agentes del libro en estas investigaciones ha evitado, por lo demás, un mayor conocimiento sobre estos, sus trabajos e intereses. Pese a los recientes avances en la historia del libro en América Latina, que han relevado el accionar local, nacional y transnacional de libreros, editores o traductores, incluso destacando su papel en operaciones de selección y marcación propias, a decir de Pierre Bourdieu, de los procesos de transferencia de capital simbólico, lo que hoy sabemos de sus vidas, negocios, conocimientos, opiniones y relaciones sociales resulta mínimo⁸.

Buscando alterar esta ecuación, este libro reconstruye las condiciones, estrategias, relaciones, objetivos y producciones que permitieron a diferentes agentes del libro establecer puentes y conducir intercambios culturales entre los países de la región. Dueños de una labor que podía acompañar o no los intereses de los elencos letrados, estos agentes construyeron vínculos de variada naturaleza y extensión, favoreciendo el diálogo y las transferencias entre distintos espacios culturales. Por ello, en este libro, figuras conocidas de la ciudad letrada latinoamericana comparten escena con actores cuyas acciones contra el problema de la incomunicación intelectual no han sido estudiadas hasta ahora, desde bibliotecarios, burócratas y diplomáticos hasta libreros, editores y tipógrafos⁹.

Poner el foco sobre los actores de la «república librera» no implica desconocer el peso de las notabilidades intelectuales decimonónicas o

[8] Bourdieu (2002). Véase para la región Sorá (2003), Granados y Murillo Sandoval (2021).

[9] Esta y todas las demás referencias a la ciudad letrada corresponden, como se infiere, a la obra de Ángel Rama ([1984] 2004).

finiseculares cuyos trabajos eran demandados con fuerza por fuera de sus geografías de producción. Esta decisión supone, ante todo, reconocer que la república latinoamericana de las letras dependió en su constitución y dinamización de otra, una conformada por figuras menos conocidas y estudiadas, pero igualmente diestras en la palabra escrita e impresa y que además contaban con conocimientos y propósitos distintos alrededor del libro. Se trataba de agentes tan propios de las geografías de la producción de libros, revistas, folletos, catálogos y demás materiales impresos como de las de su circulación y recepción, de allí su capacidad de servir como nodos de relacionamiento cultural transnacional.

Reconstruir los itinerarios conectores de estas figuras implica, en esta medida, examinar las mutaciones políticas, socioculturales y tecnológicas sufridas por todas estas geografías. Por ello, la primera parte de este libro se destina a una comparación entre las geografías del libro de Argentina, Chile y Colombia. Se trata de recorrer sus trastornos, tan determinantes en la sofisticación de los oficios libresco como en la construcción de condiciones idóneas para establecer relaciones transfronterizas. En otras palabras, entender cómo los agentes del libro fueron capaces de ser agentes de conexión precisa de un examen contextualizado del problema material de la comunicación intelectual, y en el que la entrada del continente en las lógicas del capitalismo de la edición no puede ser eludida.

El problema material de la comunicación intelectual

Las evocadas quejas sobre al aislamiento intelectual describen un problema de extrañeza entre núcleos muy conscientes de sus rasgos compartidos. Tanto la unidad lingüística como las herencias políticas y socioculturales comunes mostraban, evidentemente, que la desconexión intelectual era una situación anómala. Aunque fueron organizados bajo lógicas defensivas frente a posibles, y luego tangibles, expansiones estadounidenses e invasiones filibusteras y europeas, congresos como los de Lima (1848, 1863-1864) y Santiago (1856), representaron ejercicios tempranos de cooperación que

impulsaron ideas sobre la singularidad de la región, su identidad e incluso sobre su denominación¹⁰.

La continuidad de las quejas en torno a la ignorancia mutua muestra, sin embargo, los límites de estos primeros ensayos de acercamiento, denotando que el problema no era solo de voluntad sino también de orden práctico. Conectar las capitales y puertos no era un asunto simple entre las décadas de 1850 y 1870, ni tampoco lo sería después. A pesar de que vapores y ferrocarriles comenzaron a germinar en este periodo, estos privilegiaron trazados en sentido sur-norte, como fue el caso de la ruta californiana, en lugar de puentes interiores¹¹. La propia aceleración de los procesos de construcción estatal impuso prioridades que irían en contravía del sentido y la búsqueda de una unidad continental.

En escenarios como el argentino y el colombiano, el momento caudillista fue entendido como una de las causas del estancamiento republicano y de la no adopción de políticas modernizadoras luego de concretadas las independencias. Por ello, una vez superadas estas experiencias, los nuevos elencos en el poder concentraron sus esfuerzos en la consolidación de nuevos experimentos republicanos. La construcción estatal y nacional pasaría, en este sentido, por una fase de ensimismamiento relativo, que implicaba una concentración en los problemas propios de cada espacio político.

A pesar de todo, el interés conectivo no perecería. De hecho, este ganaría relevancia entre aquellos actores interesados en expandir el mundo del libro e instalar, en la medida de lo posible, una cultura impresa en los distintos entornos nacionales. Fue desde lugares como las bibliotecas públicas y nacionales que buena parte del interés conectivo pudo traducirse, de forma pionera, en intercambios concretos de productos intelectuales nacionales. Articuladas a las universidades, las bibliotecas centrales y otros lugares del libro fueron claves a la hora de hacer materialmente posible el diálogo intelectual transnacional desde finales de la década de 1860.

[10] Ardao (1980). Otros trabajos que problematizan la emergencia de la categoría de América Latina y su complejidad son los de McGuinness (2003), Granados (2004) y Gobat (2013).

[11] Kaukiainen (2001) y Osterhammel (2014). Sobre la ruta californiana, véase: Purcell (2017).

Con el paso del tiempo y la afirmación de ciertos órdenes políticos y sociales, la transformación mercantil de ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Santiago permitieron la aparición de nuevos canales de intercambio. Los cada vez mayores vínculos de libreros y tipógrafos locales con el mercado internacional del libro y de la imprenta impusieron condiciones nuevas y favorables para el contacto internacional, sirviendo incluso de base para la planeación y puesta en marcha de proyectos editoriales antes inconcebibles por lo riesgosos. De la mano nuevamente de las líneas de correos y vapores, pero también viajando y canjeando materiales, libreros y tipógrafos contribuyeron a la reducción de la ignorancia mutua entre los países latinoamericanos, allegando sus catálogos de venta de un lugar a otro y, con ellos, colecciones nacionales de historia y geografía, textos escolares, gramáticas y periódicos.

En relación con estas experiencias, este libro expone cómo el problema material de la comunicación intelectual en América Latina fue menos atacado por tratados o convenios multilaterales que por distintos agentes del libro. Entre estos pueden contarse, ciertamente, no pocos referentes de la ciudad letrada, pero quienes destacaron fueron sobre todo aquellos que rigieron los pocos lugares del saber existentes: bibliotecarios, libreros, tipógrafos e incluso algunos diplomáticos capaces de activar circuitos transnacionales de intercambio¹².

En general, todos estos agentes pudieron abrir vías de contacto en virtud de la modernización de sus geografías de acción, siempre dependientes del ascenso de la población lectora, las reglas del mercado y el estímulo que frente a estas últimas podían ofrecerles leyes o normativas asociadas a sus oficios, como las políticas de instrucción pública, las suscripciones oficiales a publicaciones o los decretos de libre arancel a la importación de impresos, papeles, tipos o maquinaria de imprenta.

Uno de los argumentos transversales en este libro es que, en la medida que la infraestructura librero-tipográfica de Buenos Aires, Bogotá y el eje Santiago-Valparaíso se modernizaba, distintos agentes del libro pudieron

[12] Jorge Myers (2008) afirma que, ya para finales del siglo XIX, la diplomacia empezaba a configurar «la profesión por antonomasia de los intelectuales».

conectarse e interactuar entre sí, contribuyendo de este modo a la construcción de una comunidad transnacional de intercambios que, lejos de beneficiar únicamente sus intereses, empujó la propia modernización de sus geografías de operación y dio alivio a parte de las demandas de conocimiento mutuo. Aunque nunca tomó una forma orgánica ni estable, esta suerte de comunidad construiría redes que acercarían las realidades de los países estudiados, todo mediante la puesta en circulación de sus producciones impresas.

Al centrar su atención sobre libreros y bibliotecarios, varios capítulos de este libro dislocan una opinión generalizada que, al advertir su proximidad con los círculos letrados, los entiende como figuras meramente auxiliares en la producción y diseminación de las «escrituras de orden»¹³. En general, los objetivos económicos o intelectuales de los agentes del libro suelen obviarse en aquellos estudios que, concentrados de lleno sobre ciertos faros intelectuales, eluden la existencia, así sea mínima, de un mercado del libro, o simplemente remarcan el desinterés de los letrados por ser leídos más allá de sus pares. Claramente limitantes, estas lecturas han contribuido a desconocer las prácticas en las que se involucran agentes como los libreros, editores y tipógrafos, estrechando el entendimiento de su función intermediaria entre autores y lectores, pero también entre los autores y «sus obras»¹⁴.

En un ensayo sobre la materia, Robert Darnton ha mostrado cómo el interés por los intermediarios olvidados de la literatura puede ayudar a dispersar la mistificación instalada por la visión de la historia literaria a partir del gran nombre o del gran libro¹⁵. Adaptada a la historia decimonónica y finisecular latinoamericana, el interés por los intermediarios impone dispersar las atenciones brindadas a los grandes nombres de la construcción estatal para relevar, sin desconocer la importancia de estos, las experiencias de aquellos que daban vida a los lugares del libro y los espacios editoriales, y

[13] Esta noción es tomada de Loaiza Cano (2017).

[14] Sobre el histórico papel mediador de libreros y editores, véanse Chartier (2006), Raven (2007) y Mollier (2021).

[15] Darnton (2010: 162).

que contaban, por ende, con la capacidad necesaria para propiciar interacciones a nivel transnacional.

Concentrar la atención sobre los intermediarios posibilita, adicionalmente, enlazar el horizonte de preocupaciones por el intercambio cultural con la historia del libro y la cultura impresa en América Latina. En lo que atañe a este trabajo, el estudio de las conexiones y los fenómenos de intercambio intelectual no es competencia de una vertiente historiográfica en singular, más aún si se trata de relevar en estas el papel de los agentes del libro. Dueña de una notable vitalidad, la historia del libro ha contribuido a esclarecer dimensiones antes poco tocadas en lo concerniente a la vida cultural de las principales urbes del continente. Estimulada por el giro espacial, sus avances han conectado con los progresos de la historia intelectual, posibilitando la aparición de estudios mucho mejor contextualizados en lo que respecta al espacio cultural en que se mueven las experiencias, ideas y producciones propias del quehacer científico e intelectual¹⁶.

Ahora bien, un enlazamiento entre los intereses de la historia intelectual y la historia del libro es necesario no solamente para revitalizar el papel de los agentes del libro, sino porque obliga a reconstruir con mayor rigor las condiciones que les permitieron a estos edificar una reputación como gentes de cultura, modernizar sus prácticas y atreverse a crear vínculos internacionales. Enmarcado en un momento de expansión global del mercado internacional del libro, el accionar conectivo de los agentes protagonistas de este libro no puede leerse desmarcado de los fenómenos que impulsaron parte de las mutaciones que hoy siguen rigiendo el mundo de la edición. El peso de la edición francesa en América Latina resulta, por ejemplo, infranqueable para la historia del comercio de librería en la región, y no porque respondiera a las demandas de grandes comunidades lingüísticas aquí instaladas, sino porque traducía el vigor de la industria editorial parisina y el interés por las letras francesas preexistente en el continente¹⁷.

[16] Estudios previos al ascenso de la historia del libro ya documentaban las ventajas de su articulación con el análisis de los intelectuales. Véase Brunner y Catalán (1986: 121-140). Las investigaciones recientes que destacan esta articulación son las de Horacio Tarcus, especialmente, *Marx en la Argentina: sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos* (2007) y De Freitas Dutra y Mollier (2006).

[17] Mollier (2001).

En su propósito de analizar las conexiones libreras establecidas entre Argentina, Chile y Colombia entre 1870 y 1920, varios capítulos de este trabajo recorren la evolución de aquellos lugares desde donde los agentes del libro operaban. Siempre desde una perspectiva que articula múltiples escalas, se busca comprender mejor el comportamiento de los agentes intermediarios, identificando sus estrategias comerciales, redes de abastecimiento, formas de organización y presencia en espacios de sociabilidad intelectual que pudieron reforzar su estatus o ayudarlos a reclutar nombres y títulos para sus proyectos. Se trata, en breve, de articular el problema material de la comunicación intelectual con el del ingreso del continente en las lógicas del capitalismo de la edición.

América Latina y el capitalismo de la edición

Aunque suele demarcarse sobre la década de 1940, con el impacto del exilio republicano, la integración del espacio cultural latinoamericano a las modernas convenciones del mundo del libro y la edición puede percibirse decenios antes¹⁸. Si bien no hay duda de que la llegada de intelectuales españoles con experiencias, contactos y conocimientos editoriales ayudó a perfeccionar no pocas empresas y promovió la creación de otras nuevas, es posible encontrar varios espacios editoriales relativamente bien configurados para inicios del siglo XX, y gracias también, en parte, a flujos migratorios que permitieron la instalación de empresarios gráficos alemanes, tipógrafos italianos o libreros-editores de origen ibérico¹⁹.

Por fuera de estos casos, no son pocas las experiencias que permiten constatar la presencia de un espíritu capitalista entre varios agentes del libro activos durante este periodo. Varios capítulos de esta obra documentan que las destrezas asociadas al empresario del libro moderno, como la capacidad de crear oferta, controlar las finanzas de los procesos editoriales,

[18] Sobre el proceso de consolidación del editor empresario, véanse Mollier (1988) y Haynes (2010).

[19] Para una crítica a la lectura que articula el despegue de la industria del libro americana al exilio español, véase Espósito (2010).

idear nuevas formas de publicidad y avanzar en la construcción de un público lector más amplio, fueron ensayadas por libreros y editores locales, como los colombianos Lázaro María Pérez y Jorge Roa, dos conocedores del rumbo del comercio del libro europeo y norteamericano, sus lógicas y tendencias. Tratándose de una relación entre mercados construidos y mercados en construcción, la posibilidad de experimentar prácticas modernas de edición entre los agentes del libro latinoamericanos pasaba por sus capacidades de internacionalización, de allí que solo los mejor conectados lo intentaran.

Más allá del simple emplazamiento de exiliados expertos a este lado del Atlántico, la introducción de un espíritu empresarial, ávido de rentas, pareció responder a dinámicas más amplias de transferencia cultural que operaban en virtud de la dependencia editorial de los países latinoamericanos respecto de las capitales del libro europeas. Sin desconocer la importancia del factor migratorio, este parece un elemento más dentro del proceso de internacionalización del mercado del libro que impactó sobre el comportamiento de libreros y editores latinoamericanos. La movilidad de los agentes del libro puede verse, incluso, como un fenómeno casi natural, normal desde la temprana expansión de la imprenta²⁰. La movilidad debe entenderse, en este horizonte, como una cualidad más del mundo del libro para el siglo XIX, uno formado por múltiples, extendidas y enredadas conexiones.

Como lo ha sintetizado John Hinks, el comercio de libros se ha sostenido históricamente sobre redes de diverso tipo, tanto para su producción y distribución como para la de otros bienes relacionados²¹. Las conexiones continentales y atlánticas entre los agentes del libro expresan justamente esa naturaleza. Se trata de redes diversas, que operan distintos tipos de impresos y usan asimismo distintos mecanismos de vinculación. En concordancia, otro argumento que recorre este libro es que la activa participación de libreros, tipógrafos, bibliotecarios y demás agentes facilitó su inmersión

[20] Fraser y Hammond (2008).

[21] Hinks (2017).

gradual en las lógicas del capitalismo de la edición. Iniciado con la apertura del mercado de lectores americano con motivo de las revoluciones políticas, este proceso de articulación vio su expansión en la segunda mitad del siglo XIX y en paralelo a los proyectos de construcción estatal²².

Al pensar las conexiones libreras como redes sociales, este libro se asienta sobre algunos lineamientos puntuales. En primer lugar, al tratarse de redes que no gozaron de larga estabilidad ni pervivencia, es difícil pensarlas como estructuras jerárquicas y fluidas de intercambio. El concepto de rizoma resulta aquí más útil para entenderlas, puesto que se trató de conexiones de diseños descentrados, multiformes y extensos, capaces de abrirse y propagarse, y de romperse para restablecerse luego o simplemente morir. A decir de Gilles Deleuze y Félix Guattari, el rizoma puede tener formas muy diversas, «desde su extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos»²³. Desde la historia del libro, Alison Rukavina ha demostrado la pertinencia de este concepto para analizar el crecimiento del mercado internacional del libro para finales del siglo XIX.

Aunque Deleuze y Guattari comprenden el rizoma en virtud de seis principios: conexión, heterogeneidad, multiplicidad, ruptura, cartografía y calcomanía, solamente tres se avistan idóneos para el análisis del mercado del libro: conexión, multiplicidad y ruptura²⁴. El primero sugiere que todo agente está potencialmente capacitado para conectar con otros, sea por medios propios o por la intervención de terceros, de mediaciones políticas, por ejemplo. La multiplicidad se presenta, por su parte, como el principio que subraya el crecimiento impredecible de las redes, y con ello su cualidad de abrir conexiones numerosas, simultáneas y multiformes. En otras palabras, los agentes del libro podían conectar, y de hecho lo hacían, con actores «desinteresados» del libro, como científicos o diplomáticos. Sobre el principio de ruptura, basta mencionar que las conexiones libreras reconstruidas

[22] Roldán Vera (2003).

[23] Deleuze y Guattari (2015: 16).

[24] Rukavina (2010: 17-32).

en este libro no relucen por su permanencia, dependiente siempre del contexto y de las fuerzas sociales o económicas de sus impulsores.

Gracias a estas características, el concepto de rizoma permite entender la expansión del mercado internacional del libro y sus lógicas como un problema de redes sociales complejas, el cual sintoniza con la comprensión conectada del mundo del libro y también, de forma especial, con los dominios de aquello que Martyn Lyons y Jean-Yves Mollier han denominado una historia transnacional del libro. Como puede inferirse, y, en segundo lugar, este libro se instala desde una perspectiva que se aparta del interés por examinar la evolución de la cultura del libro en un espacio nacional hermético para interrogar los intercambios múltiples y recíprocos que trascienden las fronteras²⁵.

Pensada también por sus proponentes como una historia transcultural del libro, esta orientación extiende sus dominios hacia las traducciones, las transferencias culturales, las multinacionales de la edición, las organizaciones multinacionales y la movilidad de sus agentes, todos aspectos que atraviesan este libro. La mirada transnacional brinda, ciertamente, la oportunidad de enmarcar mejor los procesos históricos, así como la de «servir a una historia de varios niveles», que comprenda a la vez aspectos regionales, nacionales y globales sin olvidar que la historia del libro ha habitado siempre geografías múltiples²⁶. Con todo, la mirada que aquí se privilegia no clausura la perspectiva comparada. Al abarcar una serie de momentos de conexión librera entre distintos países, la necesidad de examinar y contrastar el desarrollo de sus espacios editoriales se impone como una ruta útil para examinar las condiciones, propósitos y capacidades detrás de las conexiones establecidas. Comparación y conexión pueden, en fin, ir de la mano.

Dada esta doble silueta, comparada y conectada, los capítulos de este libro se organizan de la siguiente manera. Dedicada al ejercicio comparado, la primera parte introduce y descompone las mutaciones del mundo del libro y la edición en Argentina, Chile y Colombia entre 1870 y 1920. Cada

[25] Lyons y Mollier (2012: 10).

[26] *Ibid.*: 16-17. Sobre las orientaciones generales de la historia transnacional, el *pivot* de Akira Iriye (2013) resulta esclarecedor.

uno de los cuatro capítulos se concentra sobre un lugar del libro distinto (imprentas, bibliotecas, librerías, editoriales), todo con el fin de analizar sus características y transformaciones en el tiempo, y de presentar los agentes intermediarios que luego protagonizarán las conexiones.

Como en todo ensayo de comparación, esta parte resulta indispensable para encontrar y analizar similitudes y diferencias entre los casos. Lejos de plantear una separación analítica, estos elementos van a permitir subrayar no pocas interrelaciones entre agentes e instituciones propias de cada caso, dejando al lector un panorama contextualizado y dúctil para el posterior examen de sus contactos²⁷. La comparación podrá demostrar asimismo que los estadios de desarrollo de la imprenta o de habitualidad social con sus productos son característicamente desiguales en cada uno de los espacios analizados, un problema cuyo punto de partida puede bien ubicarse desde la época virreinal, pero que va a manifestar no pocos acentos durante todo el transcurso del siglo XIX y buena parte del XX.

De todas formas, vale anotar que ni siquiera dentro de unidades nacionales concretas es posible encontrar uniformidad, de allí que la investigación concentre su atención en Bogotá, Buenos Aires y el eje Santiago-Valparaíso, espacios cuyas experiencias frente al libro resultan distintivas debido al lugar que en ellas ocupa la institucionalidad. Junto a esta cuestión, es posible distinguir otras variables que colaboran en el ejercicio comparado, como son la uniformidad lingüística, aun pese a las querellas académicas y los proyectos de renovación ortográfica; el ascenso casi paralelo del comercio de librería *in situ* y formal, inexistente en todos los casos antes de las independencias y, por último, los comunes usos políticos, sociales y culturales dados a la imprenta, tecnología que funciona como un temprano vehículo de propaganda y legitimación para las élites político-letradas, pero asimismo como una herramienta elemental de la construcción estatal y la instalación de una nueva cultura política y legal.

En el marco del largo entre siglos, los tres países mencionados presentan otros rasgos que justifican su selección. Además de que los tres definen

[27] Sobre la pertinencia de la historia comparada frente al giro transnacional, véanse Kocka (2003) y Siegel (2005) y Haupt y Kocka (2009: 1-30).

sus fronteras políticas para este periodo, al calor de guerras, ocupaciones y fragmentaciones, todos logran ingresar de lleno, aunque a velocidades distintas, al mercado internacional, posibilitando grandes y pequeños auges económicos que jalonaron sus primeras instancias de industrialización. En términos políticos, el periodo expone también el paso de regímenes liberales a ciclos o hegemonías conservadoras, que menos distinguibles de los primeros por su accionar económico, lo van a ser por sus dictámenes en cuanto a asuntos como la centralización administrativa, el lugar de la Iglesia católica en la vida política y educativa, la revaloración de España, o su concepción del orden social y público como camino al progreso²⁸.

El sentido de la comparación que delinea los primeros capítulos de este libro dista, en fin, de solo pretender contrastar datos disponibles sobre la evolución de los espacios editoriales seleccionados. Siguiendo la perspectiva que adopta Christophe Charle para el estudio de los intelectuales europeos, la comparación sirve aquí como «una vía hacia la percepción y la definición de la realidad sociocultural de los grupos o individuos estudiados», caracterizados «por estar menos anclados que el término medio en el espacio cultural de sus países respectivos»²⁹. De esta forma, si para el historiador francés los intelectuales actúan o reaccionan dentro de un horizonte histórico que es, sino continental, al menos supranacional, para esta investigación los agentes del libro también, y la gracia de compararlos es, justamente, la de exponer su contexto de localización y acción.

Las partes segunda y tercera se dedican de lleno a las conexiones libreras. Conviene subrayar de una vez que estas no remiten simplemente a aquellas activadas por los libreros, sino a todas aquellas que implicaron la movilidad de materiales impresos. La distinción entre estas partes radica en un aspecto temporal. Los capítulos quinto, sexto y séptimo analizan tres redes de intercambio traslapadas entre las décadas de 1860 y 1890: las formadas por las bibliotecas centrales, las librerías y algunos editores. Los capítulos octavo y noveno trabajan, por su parte, una serie de conexiones estructuradas

[28] Alonso y Bragoni (2015), Jaksic y Ossa (2017) y Urrego (2002).

[29] Charle (2000: xxvi).

al filo del siglo XIX, pero cuya vitalidad se hizo más clara en las décadas de 1900 y 1910. Se trata de redes que rompieron con las formas de entrelazamiento previas, al distanciarse de los lugares del saber letrado tradicionales y tocar nuevos grupos, o buscar imponer nuevas jerarquías de vinculación transnacional desde centros no precisamente latinoamericanos.

Como se ha indicado párrafos antes, el sentido de explorar las conexiones es múltiple. Más allá de que enfoques como la historia conectada, transnacional o global recalquen un interés por las conexiones y las reciprocidades entre distintos espacios, en el caso de este libro el estudio de la conectividad *mediante* libros entre Argentina, Chile y Colombia advierte también un interés por relevar la historia de los intermediarios olvidados de la literatura y, con ello, su papel en los esfuerzos de comunicación e intercambio intelectual a nivel latinoamericano. Inscrito en los campos de la historia del libro y la historia intelectual, el estudio de las conexiones libreras aspira a rebasar las visiones que, al acentuar las conexiones sobre los elencos letrados nacionales, restan visibilidad a toda una serie de agentes del libro involucrados directamente en dicha tarea.

Como se espera dejar claro en las páginas que siguen, el interés por las conexiones basadas en los agentes del libro sugiere avanzar en una genealogía más precisa de los momentos de integración o religación cultural latinoamericana. Momentos en los que, más que la posible concreción de una «patria intelectual» continental, se hicieron evidentes necesidades de visibilidad intelectual, de lectura y reconocimiento mutuo, todo en un contexto en el que también se aceleraban los vínculos e intercambios de la región con el resto del mundo.

PRIMERA PARTE

**La germinación de los
espacios editoriales**

Entre los historiadores del libro y la edición existe el consenso de que la década de 1930 marca el comienzo de la edad dorada del libro en América Latina. La transformación de los espacios editoriales mexicano y argentino entrega el ejemplo más acabado de esta lectura. En ambos, el impacto del exilio español, como consecuencia de la guerra civil, se eleva como factor determinante en el análisis de crecimiento de su industria editorial para esta década y las dos siguientes. En efecto, el arribo y asentamiento en México y Buenos Aires de editores, académicos y, en general, de hombres y mujeres de letras españoles con conexiones literarias, prestigio y experiencias en la conducción de empresas, constituyó un empuje considerable para un escenario que bien podía parecer estancado frente a los ritmos tomados por la industria del libro en otras latitudes. Los índices de producción bibliográfica en ambos países, que señalan un visible ascenso desde 1936, paralelo a la parálisis española, ponen énfasis en la rareza y significancia de este momento¹.

La contundencia de esta lectura lleva a olvidar, sin embargo, que los elencos españoles llegados a América Latina no ejercieron sobre una *tabula rasa*. No eran pocos los países de la región que para la década de 1930 contaban con una infraestructura tipográfica importante, territorialmente extendida y manejada por operarios expertos. Tampoco eran pocas las librerías

^[1] Los trabajos de Bernardo Subercaseaux (2010) y José Luis de Diego (2014) son imprescindibles para acercarse al fenómeno.

o editoriales que contaban con un público lector más o menos fidelizado, producto de las reformas educativas, la expansión de la práctica lectora y el acceso cotidiano a suplementos y colecciones de bajo o mediano costo. Asimismo, existían redes continentales y transatlánticas que funcionaban en conformidad con el avance de las comunicaciones, permitiendo el intercambio entre los países de manera más o menos efectiva y a pesar de las dificultades geográficas. Formando extensas redes de filiales y correspondencias, los espacios del libro de la región garantizaban, en cierta medida, la circulación constante de novedades propias o importadas entre los distintos países.

Dadas estas características, es posible afirmar que, al momento de estallar la guerra civil española, los espacios editoriales de varios países latinoamericanos contaban con un nivel de organización no menos apreciable, evidente además en toda una serie de agentes, espacios y políticas que permitía al libro y los productos impresos, si bien no triunfar como un próspero bien de consumo, sí contar con un lugar firme en el mercado y en los patrones de consumo urbanos. No se trata aquí de plantear una relocalización de la edad dorada del libro latinoamericano, sino de contextualizar los porqués de ese triunfo editorial más allá de un proceso de movilidad y transferencia intelectual que no sería el primero ni el último en provocar mutaciones sobre el mundo impreso del continente.

Los capítulos que siguen reconstruyen los tiempos y desarrollos de tres espacios editoriales distintos, buscando identificar las circunstancias que favorecieron su crecimiento o modernización, así como los atributos que alcanzaron para poder responder al momento surgido en la década de 1930. Abierto sobre las últimas décadas del siglo XIX, con la reinsertión de la región al mercado internacional, el inicio de los proyectos de instrucción pública y el avance del proceso migratorio en varias ciudades, y extendido hasta el decenio de 1910, momento de conmemoraciones y tensiones, el periodo de crecimiento y organización de estos espacios editoriales demanda un análisis comparado alrededor de los lugares, agentes, saberes y producciones cuyo desenvolvimiento determinó su evolución.

Las mutaciones socioeconómicas y técnicas de la esfera tipográfica en los tres países escogidos serán el primer asunto a explorar. Gracias a datos

cuantitativos y a la identificación de varios momentos de sofisticación intelectual y organización laboral en torno a los oficios de la imprenta, se reconstruye la evolución de este ámbito en los países escogidos. Junto con profundizar en algunas experiencias particulares, esta parte explora la historia de las imprentas nacionales y, con ello, el problema de la autonomía editorial del Estado para el periodo. El estudio de dos lugares del saber tan opuestos como complementarios, como son las bibliotecas y librerías, conforma los dos capítulos siguientes. En estos se relevan sus momentos de consolidación y «profesionalización», así como sus interacciones y expansiones, las cuales, pese a conectar fenómenos antagónicos —unas de acumulación y otras de comercialización— resultan expresivas de cambios sociales, ya que retratan la presencia de una población no solo más abundante y alfabetizada, sino también más habituada a la lectura.

Junto con mostrar las transformaciones en espacios de recepción y difusión del libro, y lo que estas representaron en la expansión de una cultura impresa en los casos analizados, esta primera parte cierra con una exploración de las colecciones editoriales que emergen desde las últimas décadas del siglo XIX, haciendo evidente la presencia de nuevas prácticas y estrategias dentro un mercado del libro que parece adaptarse a las demandas de públicos lectores nuevos y diversos en términos etarios, profesionales y sociales. Como reflejo adicional de la expansión de la cultura impresa en las geografías urbanas, el estudio de las colecciones y sus responsables permite observar la gradual normalización del producto impreso en la vida cotidiana, fenómeno alentado por su abaratamiento y su cada vez mayor conexión con los gustos e intereses de los lectores.

La industrialización de la esfera tipográfica

A diferencia del sector primario-exportador, cuya importancia para las economías latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XIX legó una base documental abundante y heterogénea que ha permitido analizar sus ritmos de crecimiento, incidencia en la modernización estatal y, en general, su peso en los procesos de diferenciación social y territorial, aquellos ramos asociados o dependientes de las importaciones resultan hoy más difíciles de estudiar. De tamaños y ganancias menores, con impactos menos obvios y no siempre bien regulados por la fiscalidad estatal, ramos como el integrado por impresores, tipógrafos, litógrafos y encuadernadores exponen límites que evitan los análisis detallados. Gran parte de su vitalidad fue, de hecho, seguida más por bibliógrafos interesados en cuantificar los títulos publicados que en examinar las cuentas de los talleres o la cantidad de papel que estos importaban.

Los indicadores existentes exhiben, a su vez, un desequilibrio que impide la realización de comparaciones efectivas. Las estadísticas de importación de productos trascendentales para el oficio tipográfico, como el papel o las tintas, no se caracterizaron por su continuidad en el tiempo y presentan la dificultad de expresar sus valores en medidas diferentes (resmas, kilogramos, bultos) y en sus monedas de origen. Aunque estos últimos factores son superables, la presencia de vacíos en las estadísticas de comercio exterior y de ítems no totalmente equivalentes impiden localizar picos de importación o incluso aproximarse a la geografía de su consumo, sobre todo en países como Colombia donde las aduanas estaban muy lejos de la capital

y donde otras ciudades también absorbían grandes importaciones; fenómeno este último percibido también en Argentina, donde ciudades como La Plata y Córdoba aumentaron su demanda de bienes después de 1890.

Tocantes a la dificultad de comparar basados en cifras uniformes, estas consideraciones no impiden, sin embargo, documentar las mutaciones de un ramo que antes de 1870 presentaba en casi toda América Latina unas condiciones muy similares a aquellas con las que había despegado en la década de 1820. No es poca la información proveniente de censos o crónicas dedicadas a algunos de los grandes establecimientos que aportan datos sobre sus estadios de desarrollo, el tamaño de sus capitales o el número de personas que llegaron a emplear. Si bien todos los escenarios a comparar presentan corpus distintos alrededor del ramo de la imprenta, sus agentes y desarrollos, cada uno exhibe atributos que permiten esclarecer las mutaciones de la esfera tipográfica para el periodo entre siglos.

Al no poder depender solo de las cifras, este análisis comparado releva entonces el entrecruzamiento de tres procesos que, alentados tanto por las políticas educativas como por el fenómeno migratorio, marcaron la modernización de la esfera tipográfica, como son: (1) su renovación *técnica*, notable en la circulación y apropiación de nuevas tecnologías y saberes; (2) las cuestiones *sociales* asociadas a esta renovación y que pueden percibirse en la evolución organizativa de los trabajadores, y (3) el creciente papel de algunas unidades impresoras *estatales* dentro del espacio comercial, hecho que implicó que el Estado fuera ya no solamente rector del mundo impreso, sino también actor clave de este.

Migraciones, saberes y modernización

Existe una relación entre el avance de las políticas de instrucción pública adelantadas en Argentina, Chile y Colombia desde la década de 1860 y la evolución de la infraestructura librero-tipográfica de cada país. La creación de una demanda oficial de libros, cartillas, mapas, silabarios, cuadernos, lápices y demás útiles escolares alentó el inicio de importantes procesos de importación de materiales desde Europa y Estados Unidos, destinados a

dar forma a las escuelas normales y primarias, y fue un factor determinante para la renovación de un ramo que hasta entonces se ocupaba, mayoritariamente, de producir periódicos políticos, obras oficiales —memorias, códigos, anuarios— y, en menor medida, trabajos literarios, históricos y científicos, junto con un diverso conjunto de obras menores y efímeras como almanaques, sueltos, catecismos y devocionarios.

Con la excepción de Bogotá, cuya evolución cuantitativa no fue significativa, el número de imprentas en el eje Santiago-Valparaíso y en Buenos Aires resultó casi triplicado entre las décadas de 1870 y 1880 (véase la tabla 1). En concordancia, el aumento de los trabajadores adscritos al mundo tipográfico fue también notorio. Si el censo de 1869 contó cuatrocientos sesenta tipógrafos (con cajistas e impresores) en Buenos Aires, el realizado en 1895 reportó mil quinientos cuarenta y ocho, la mitad de estos extranjeros. Los litógrafos también aumentaron, pasando de setenta y siete en 1863 a seicientos diez en 1895. Más de la mitad de los litógrafos de este segundo censo eran inmigrantes¹. De veinte mujeres dedicadas a la profesión, ocho también reportaban no ser argentinas. Para 1905, el gremio bonaerense albergaba, mal contados, unos cuatro mil tipógrafos y poco más de dos mil litógrafos².

TABLA 1. Expansión de los establecimientos de imprenta, 1860-1889

Década	Santiago-Valparaíso	Buenos Aires	Bogotá
1860-1869	—	15	11
1870-1879	13	39	12
1880-1889	46	59	17
1890-1900	—	111	—

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de cada país.

[1] S/N (1872b: 70-74), S/N (1898: 47-50).

[2] Redacción de *Éxito Gráfico* (febrero de 1909). «Talleres gráficos de Buenos Aires», *Éxito Gráfico*, 39, 26-27.

El incremento de los trabajadores de imprenta en Chile también fue notorio. Según los censos, el número de litógrafos se duplicó en el eje Santiago-Valparaíso entre 1875 (treinta) y 1895 (ciento cinco). Diez años después, otro censo reportaría casi trescientos litógrafos solamente en Santiago. La cifra de tipógrafos, siempre mayor en comparación a sus compañeros, atestiguó una evolución propia. Si en 1875 se contaron cuatrocientos sesenta y dos en el eje descrito, la cifra alcanzó los seicientos cuarenta y cuatro en 1885 y los ochocientos diez años después³. Una estadística de industrias publicada por el *Boletín* de la Sociedad de Fomento Fabril en mayo de 1907 reportaría para este momento quinientos doce tipógrafos empleados en treinta y cuatro imprentas censadas solo en Santiago (alrededor de la mitad de las existentes), una cifra que contaba a la vez dieciséis mujeres y cuarenta y siete niños⁴.

Para el caso bonaerense, el crecimiento tipográfico corrió de forma paralela a administraciones seriamente preocupadas por la edificación de un aparato educativo en Argentina, como las de Bartolomé Mitre (1862-1868) y Domingo Faustino Sarmiento (1862-1874), este último quizás el referente intelectual más preocupado por la expansión del libro en su país y todo el continente americano. Conocedor de los sistemas europeos y estadounidenses, que había logrado estudiar con el apoyo del Gobierno chileno en el marco de su exilio, Sarmiento fue un notable impulsor de las campañas de alfabetización, de las políticas relativas a las bibliotecas populares y de la posterior Ley 1420 de Educación Común de 1884, normativa que impulsaría desde el cargo de director del Concejo Nacional de Educación. Sarmiento estimaba, sin embargo, que los libros para las escuelas argentinas debían ser suplidos menos por las imprentas locales que por las casas editoriales extranjeras ya especializadas en la materia.

[3] Estas cifras pueden revisarse en S/N (1876: 393, 439) y S/N (1890: 233, 260).

[4] Dentro del universo de litógrafos, la estadística reportó la presencia de treinta y una mujeres y setenta y seis niños; véase: Redacción de *Noticias Gráficas* (julio de 1907). «La estadística industrial tipográfica». *Noticias Gráficas*, 1(49), 214. El *Anuario* de Alberto Prado Martínez para 1905 cuenta setenta y tres establecimientos para este año, cuarenta y ocho de ellos en Santiago.

Subestimaba, sin duda, el potencial de un ramo que, además de beneficiarse de los ritmos del comercio exportador, se veía favorecido por las propias políticas educativas y el constante arribo de una masa migrante con saberes y experticias en el arte tipográfico. De acuerdo con el conteo de Sergio Pastormelo, realizado a partir del *Anuario bibliográfico* de Alberto Navarro Viola, la edición de libros y folletos resultó duplicada entre 1879 y 1887, un fenómeno tan articulado a las políticas de subvención a escuelas y bibliotecas como a la renovación humana que atestiguaba el paisaje tipográfico⁵. No fueron pocas las casas de imprenta, litografía, encuadernación o librería levantadas por inmigrantes europeos en este periodo. Algunas de las fundadas sobre la década de 1860, como las de Pablo Emilio Coni, Jacobo Peuser, Guillermo Kraft, integraban para la década de 1890 el conjunto de negocios más prósperos de la ciudad, todos relativamente a la vanguardia de los adelantos industriales. Empresas gráficas más jóvenes, como las de J. H. Kidd, Hanz Kunz, Jacobo Kligenfuss, Mateo Serra, Stiller & Laas y Fessel & Mengen, y grandes establecimientos de la Compañía General de Fósforos y la Sud Americana de Billetes continuarían demostrando el peso del factor migratorio en las dinámicas del ramo hasta bien entrado el siglo xx.

En Chile, donde las políticas de instrucción no alcanzaron el vigor argentino, la expansión del gremio tipográfico se vio favorecida por el fortalecimiento del aparato estatal y el crecimiento económico posterior a la guerra del Pacífico, asociado por supuesto al aumento de las rentas del salitre⁶. Con un mercado corto pero activo, gracias en parte a la institucionalidad universitaria y a la continuidad de normas como la de la propiedad literaria de 1834, la tipografía chilena mostró un proceso de modernización gradual, estimulado a su vez por movi­lidades transnacionales. Antes de la era del nitrato, el tipógrafo de origen alemán Federico Schrebler ya había proyectado la organización en Santiago de un establecimiento de imprenta «a gran escala» y digno, en sus palabras, de las «legítimas exigencias de un país tan culto»⁷. Respal­dado por Diego Barros Arana y Miguel Luis Amunátegui,

[5] Pastormelo (2014: 5-8).

[6] Sobre el desarrollo económico chileno antes de 1880, véase Mayo (1979).

[7] Schrebler (1873: 3).

Schrebler impulsó en 1873 la creación de una sociedad empresarial capaz de agrupar talleres de tipografía, litografía, grabado, encuadernación y rayado, así como un almacén de tipos, papeles, máquinas y útiles de imprenta. Su plan contemplaba incluso un viaje a Alemania para reclutar operarios.

Aunque la crisis económica de 1875 parece haber frenado esta iniciativa, proyectos de otros migrantes como Guillermo Helfmann, Hugo Keymer, Félix Leblanc y Rafael Jover pudieron asentarse y dejar su marca en la historia del libro chileno. El caso de Helfmann resulta ilustrativo de la evolución de este empresariado migrante. Asentado en Valparaíso en 1855, en pleno auge comercial del puerto debido a la fiebre del oro californiano y la explotación de la ruta marítima del Cabo de Hornos, su Imprenta del Universo dio cuenta de una de las actividades más largas y plurales en términos de producción impresa⁸. Iniciado su despegue en la década de 1860, con la publicación de libros y periódicos en inglés y alemán ideados para satisfacer las demandas de las colonias extranjeras, Helfmann pudo convertir su establecimiento en un centro aglutinador de los distintos oficios del ramo, desde la litografía hasta el fotograbado⁹. A comienzos del siglo xx, sucedido por su hijo Gustavo, la empresa asumiría con éxito la producción de magazines de variedades, logrando fusionarse en 1919 con la firma Zig-Zag, hecho que la convirtió en la principal editora del país hasta mediados del siglo xx.

La Imprenta Barcelona de Ignacio Balcells y Luis Barros Méndez exhibe un caso similar. Sin depender expresamente del renglón educativo, quizás sí del empresarial, la Barcelona contaba con instalaciones especialmente diseñadas para sus operaciones desde 1894^[10]. De acuerdo con el *Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril*, sus talleres albergaban para 1896 secciones

[8] Marichal (1992: 86-88).

[9] Helfmann dirigió el periódico *The Chilean Times and Mercantile & Shipping Gazette for the West Coast of South America*, cuya vida se prolongó de 1876 a 1907, alcanzando más de dos mil cuatrocientos números.

[10] Para inicios del siglo xx, la Imprenta Barcelona promovió entre los tipógrafos concursos dedicados al *affiche* empresarial, formato que se había convertido, según ellos, en un medio de expresión del arte modernista. Véase Imprenta Barcelona (1901).

dedicadas a tareas de composición, estereotipia, impresión y encuadernación, las cuales ocupaban entre setenta y ochenta trabajadores según la cantidad de trabajo^[1]. Un lustro más tarde, la Imprenta Barcelona pudo incluso participar en la Exposición Universal de Buffalo de 1901 como parte de la delegación chilena, evento en el que hizo gala de sus mayores innovaciones, que hacían evidente el aprovechamiento de sus máquinas marca Albert de Frankenthal, todas compradas en Francia por uno de sus socios justo en el marco de otra exposición universal, la de París de 1900^[12].

Un poco menos rutilante, pero igualmente clave para la modernización del sector, fue la experiencia del fotógrafo y litógrafo Félix Leblanc. Miembro fundador del Círculo Francés, Leblanc había iniciado su carrera como fotógrafo de la mano de Émile Garreaud, con quien había ganado el premio de primera clase en la categoría de Fotografía Nacional en la Exposición Internacional de Chile de 1875. Como sucesor del estudio de Garreaud, Leblanc sostuvo una larga carrera en solitario, especializándose en la edición de mapas, álbumes artísticos y música. A la altura del año 1900, la firma litográfica de Leblanc contaba con talleres industriales y un amplio reconocimiento en el mercado local, validado por sus logros en la Exposición de Chile de 1910 y la Exposición Nacional de 1916. Las capacidades adquiridas por la empresa le permitieron además sobrevivir a la muerte de su fundador, ocurrida en 1917. Sucedida primero por Juan Cerrato y más tarde por Paul Imbert, la Litografía Leblanc logró mantenerse a flote hasta la década de 1940^[13].

Establecimientos como los descritos representaban, ciertamente, el mejor rostro de un sector cuya industrialización era transversal, como indica el uso de energía eléctrica como fuerza motriz en casi todos los establecimientos para el decenio de 1900. Usada primero en la iluminación de espacios públicos, el uso de la corriente eléctrica como fuerza motriz de imprentas y litografías se hizo común en el siglo xx, momento cuando el vapor

[1] Pérez Canto (1896: 134-136).

[12] Laso (1902: xxxviii-xliii).

[13] Escobar (1926: 40).

se abandona casi totalmente en Buenos Aires y Santiago. En esta última ciudad, el total de las empresas agrupadas en el sector de papeles, impresiones y manufacturas contaba con motores eléctricos para 1906^[14]. Mientras que, en el caso bonaerense, ya solo trece de los quinientos cincuenta y un establecimientos de imprenta y litografía contabilizados en el censo de 1914 manifestaban aún usar fuerza basada en el vapor¹⁵.

En contraste con las experiencias anteriores, la no alineación entre crecimiento económico y migración parece explicar el poco dinamismo del ramo tipográfico colombiano a finales del siglo XIX. Empero, la ausencia de este factor bifronte no se tradujo en el estancamiento del mundo impreso colombiano. Gracias a políticas económicas favorables a las exportaciones, y que giraron inicialmente alrededor del tabaco, el país había logrado abrirse también a importaciones de todo tipo. Extendidas durante los Gobiernos liberales de las décadas de 1860 y 1870, estas políticas se tradujeron en exenciones tarifarias que pusieron los puertos colombianos en el mapa de las compañías navieras y agentes comisionistas. Articulados con reformas educativas de ambición, como la materializada en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP) en 1870, estos procesos de inserción en la economía mundial determinaron un incremento en las importaciones de impresos y útiles escolares sin precedentes en el país.

Pensado para dar forma a un sistema escolar público, secular y obligatorio, el proyecto educativo de los Gobiernos liberales, afianzado por una «burocracia instructora» decidida, buscó suplir los límites de la esfera tipográfica local aprovechando la experiencia industrial y pedagógica franco-alemana. La importación de libros impresos se multiplicó por siete entre 1867 y 1873, mientras que la de libros en blanco aumentó más de veinte veces entre 1869 y 1873^[16]. El favorecimiento a estas importaciones estimuló notablemente, según veremos, el gremio de comisionistas y libreros en vías de profesionalización, pero también daría impulso a procesos de renovación en el gremio tipográfico local.

[14] Sociedad de Fomento Fabril (1908: 13).

[15] S/N (1917: 254).

[16] Véase las *Memorias de Hacienda i Fomento* correspondientes a los años 1869, 1870 y 1874.

Las máquinas tipográficas, el papel y los útiles de imprenta integraron otro de los conjuntos de mercancías favorecidas por una política arancelaria que, confeccionada sobre un ideal de lo práctico, entendía estos bienes como fundamentales para el desarrollo científico y técnico del país¹⁷. La importación de papel pasó así de representar alrededor de 70 000 kg para 1867 a cuadruplicarse para 1869 (285 000 kg), para mantener luego en promedio una cifra anual cercana a los 150 000 kg hasta mediados de la década de 1880. La imprecisa categoría de «útiles de imprenta», que podía incluir tipos, tintas, herramientas, prensas de mano, entre otros, se vio a su vez triplicada entre 1869 y 1882, pasando de poco más de 11 000 kilogramos de materiales importados a 34 000. Absorbidos por el todavía pequeño gremio capitalino, estas importaciones renovaron la silueta del espacio tipográfico colombiano, que luego de la década de 1870 empezó también a crecer regionalmente¹⁸.

La inmersión de los Gobiernos liberales en la instrucción pública seguía, en cierto modo, los derroteros argentinos y chilenos en el ámbito. Su interés por controlar la selección, adquisición y distribución de los libros y útiles, así como su preocupación por difundir las obras surgidas del cerco universitario, le permitieron funcionar como una especie de agente librero, cuyo trabajo además protegía a parte del gremio de impresores. No fueron pocas las imprentas que alimentaron sus arcas con encargos oficiales desde la década de 1860, por medio de contratos de publicaciones oficiales. Imprentas como las de Echeverría Hermanos, José B. Gaitán y Medardo Rivas figuraron entre las beneficiadas. Durante el periodo de la Regeneración, empresas más afines al conservatismo también gozaron de protección, como la imprenta de La Luz y la de Antonio M. Silvestre, esta última empleadora del círculo de grabadores responsables de los periódicos de mejor acabado gráfico del periodo: *Papel Periódico Ilustrado* (1881-1888) y *Colombia Ilustrada* (1889-1891).

[17] Sobre el trasfondo ideológico de estas medidas, véase Safford (1989).

[18] La segmentación regional y económica del país había permitido desde la década de 1820 la expansión de la actividad impresora, al menos mínimamente, a ciudades como Medellín y Cartagena, cada una con alrededor de cuatro establecimientos activos a mediados de la década de 1870.

Ahora bien, sobre el final del siglo XIX, el traspaso del sistema educativo a la Iglesia alentaría movibilidades transnacionales mucho más significativas para el ramo tipográfico que las percibidas durante el radicalismo liberal, que potenció el arribo de producciones impresas mas no la generación de mano de obra especializada. La articulación de la orden salesiana con las Escuelas de Artes y Oficios llevaría, por ejemplo, a la creación de los primeros talleres de enseñanza de encuadernación y tipografía de Colombia en 1891, espacios que se complementarían con la apertura de la primera fundición de tipos en 1893, instalada también por los salesianos. Regentados por maestros italianos que integraban la orden, estos espacios de aprendizaje representaron un giro en la forma de reproducción de los saberes y en la propia situación técnica del ramo, el cual alcanzó una silueta casi profesionalizada hacia la década de 1920^[19].

La fundación de tipos no era, sin embargo, una novedad, pues empresarios como Alejandro Berheim y Ángel Estrada ya habían puesto en marcha talleres de esta índole desde la década de 1860. En 1883, Alberto Navarro Viola afirmaría, de hecho, que el *Muestrario de tipos, máquinas y útiles para imprenta y litografía* de la casa Estrada estaba a la altura de catálogos como el de la firma Farmer, Little & Co., de Nueva York²⁰. La reproducción de los saberes fue también más evidente en los contextos donde hubo un mayor impacto de la migración. Como destaca la historia económica reciente, junto con la inmigración llegó también «la experiencia de personas que ya conocían la civilización industrial, que traían conocimientos, experiencia práctica, cultura empresarial, técnica y obrera...»²¹. Si bien sobre este punto se profundiza en otro capítulo, no sobra señalar el peso de algunos actores foráneos en la expansión de conocimientos tipográficos.

Un caso famoso es el de Benito Hortelano, impresor que arribado sobre el final de la época de Rosas publicaría el *Manual de tipografía para uso de los tipógrafos del Plata* (1864). En Santiago, entre tanto, destacaron trayectorias

[19] Barrera Jurado *et al.* (2014).

[20] Navarro Viola (1884: vol. 5, 161-162).

[21] Bértola y Ocampo (2013: 105).

como la del editor Rafael Jover, autor de *La lectura y corrección de pruebas de imprenta* (1888), o la del maestro vasco Manuel Ramos Ochotorena, autor de *Apuntes sobre los orígenes de la escritura en España i de los caracteres de imprenta* (1893), obra que se convirtió en un libro de referencia²². La emergencia de algunas revistas gráficas terminó por impulsar la popularización de técnicas en distintas materias. Lideradas también por editores de origen ibérico, revistas como *La Tipografía Argentina* (1888) o *La Revista Tipográfica* (1892-1893) prestaron sus páginas a la publicación de guías y tratados sobre máquinas e instrumentos, sirviendo así de aparato instructor para obreros, maestros y empresarios gráficos²³.

De la mano de estos proyectos, algunas publicaciones obreras se empeñaron también en ayudar a perfeccionar los saberes tipográficos. Un caso llamativo lo representa la revista *El Obrero Ilustrado* (1906-1907), publicación quincenal surgida en Santiago y que se consideraba a sí misma «educativa de artes e industrias, dedicada a la clase obrera». Además de presentar ella misma rasgos materiales innovadores, visibles en el uso de caracteres de fantasía y la profusa inserción de imágenes, atributo este último que reafirmaba el doble sentido de su condición «ilustrada», la revista se encargó de dar cubrimiento al movimiento de las escuelas-talleres obreras, y de abrir sus páginas a la difusión de innovaciones, conferencias y manuales, entre los que destacó una brevísima guía sobre el fotograbado de originales a pluma. Escrita por Guillermo Segundo Helfmann, miembro de la dinastía empresarial ya referida, esta guía documentaba el interés por los procedimientos de ilustración para comienzos de siglo, interés compartido por obreros y futuros jefes patronales.

En fin, tanto las especializadas revistas técnicas como las ideadas para ilustrar a los obreros hicieron evidente el papel de ciertas voluntades migrantes en la popularización de los conocimientos tipográficos, un factor que incidió ampliamente sobre la evolución de los oficios, la modernización

[22] En 1889, la Escuela de Artes y Oficios de San Martín (Argentina) daría cuenta también del *Tratado de tipografía*, obra de Marcos Gallo.

[23] Ángel Cresta, maestro tipógrafo italiano, fue quien experimentó el fotograbado por primera vez en Chile, justamente dentro de la *Revista Tipográfica* que dirigía Manuel Ramos.

de las prácticas dentro de los talleres y la propia expansión de una cultura de lo impreso en las principales urbes. No obstante, junto con otras producciones surgidas desde los espacios gráficos, estas revistas mostrarían otro tipo de cuestiones derivadas del fortalecimiento del ramo de la imprenta, las cuales demostrarían la ligazón existente entre la renovación tecnológica y la cuestión social.

Asociacionismo, conflicto y mecanización

La modernización del sector manipulador de papeles, tintas y tipos no representó una *belle époque* para sus trabajadores. Pese a que el crecimiento industrial ampliaba el número de plazas que podían ocupar hombres, mujeres y niños dentro de los distintos talleres, la *rage de gain*²⁴ que empieza a hacerse visible hacia la década de 1880 no arrastró consigo el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las imprentas. Tal situación chocó pronto con las asociaciones obreras permeadas por nuevas ideas sociales y económicas, y muy conscientes de la desprotección estatal. Para los casos más meridionales, el factor migratorio no solo alentó renovaciones en la circulación de saberes nuevos, sino que aportó experiencias sociales y políticas, marcos ideológicos más pertinentes a contextos industriales, e incluso liderazgos capaces de engranar con aquellos surgidos localmente.

La tradición asociativa existente en Buenos Aires y el eje Santiago-Valparaíso sirvió como un colchón de recepción inicial de estos elementos. La mayoría de las sociedades tipográficas se remontaban a la década de 1850, que vio surgir las Sociedades de Santiago (1853) y de Valparaíso (1855), y la Tipográfica Bonaerense (1857), todas fundadas bajo los principios del ahorro, la instrucción y la ayuda mutua. Aunque sus trayectorias se prolongaron hasta entrado el siglo xx, las demandas aparecidas en las últimas décadas del siglo xix mostraron sus límites. Las nuevas agendas instaladas entre los trabajadores motivaron tempranos deslindes, así como el inicio de

[24] Esta expresión puede traducirse como ansias del lucro o locura por la ganancia.

asociacionismos más militantes²⁵. La Tipográfica Bonaerense se vio, por ejemplo, fracturada en 1877 por la separación de miembros que querían una organización más exigente con respecto al mejoramiento de las condiciones laborales. La primera huelga de tipógrafos de Buenos Aires ocurrió bajo este manto en 1878. Comandada por la nueva Sociedad Unión Tipográfica, el relativo éxito de este movimiento demostró una mutación en la silueta organizacional y política de los trabajadores gráficos.

Valparaíso también vio surgir en 1892 una nueva y más activa sociedad, la Liga General del Arte de la Imprenta, que llamó a los tipógrafos chilenos a defender los intereses del trabajador gráfico de manera articulada. En sus estatutos, la Liga anunciaba su objetivo de «oponer a los abusos de los dueños de taller o de sus representantes, una resistencia constante y enérgica por medio de sus cajas de ahorro [...] i de la fuerza moral i material que da el número»²⁶. Aunque este se ablandó un poco para 1894, año en que los estatutos se reformularon para buscar solo «propender al mejoramiento de la situación económica de los operarios de imprenta [...] guardando el respeto y las consideraciones debidas a los industriales y jefes de talleres y mantener con ellos la más perfecta armonía, basada en los sentimientos de justicia y equidad»²⁷, lo cierto es que las viejas sociedades mutualistas fueron rápidamente opacadas por organizaciones de perfil más sindical, que activaron huelgas de manera constante y que exigieron, en general, disfrutar de los beneficios de un ramo cuya vitalidad presenciaban.

De la mano de las sociedades más militantes, el periodo entre siglos vio incrementar las publicaciones periódicas surgidas desde y hacia los trabajadores del ramo. Solo en Buenos Aires aparecieron trece publicaciones de este tipo entre 1887 y 1914, el mismo número se registra para el eje Santiago-Valparaíso entre 1886 y 1920. De vigencia variada, estas se dividían entre periódicos societarios y revistas de perfil técnico, pero compartían objetivos básicos como el de examinar el movimiento de la industria, dar a

[25] Sobre las organizaciones tipográficas pioneras en Chile, véase Grez Toso (1997: 390-395).

[26] S/N (1892: 1).

[27] S/N (1894b).

conocer los progresos del asociacionismo, difundir material de instrucción y denunciar los atropellos del empresariado. Junto con los órganos obreros y socialistas, estos medios atacaron los mitos de armonía en el taller difundidos por las grandes imprentas en almanaques y anuarios, materiales que representaban los progresos de los establecimientos de la mano de representaciones visuales de sus trabajadores, siempre pasivos.

En 1897, un artículo publicado en *La Vanguardia*, órgano del Partido Socialista argentino, comparó la relación entre empresarios y obreros de la imprenta con la de los lecheros que dejaban morir los terneros por exprimir hasta el cansancio algunas de sus vacas. Firmado por «Un Tipógrafo», el artículo subrayaba el crecimiento de talleres como los de *La Prensa*, *La Nación*, *El Diario*, la casa Peuser y la Compañía de Billetes de Banco, «al nacer: boliches la mayoría de ellos, y hoy varias veces millonarios casi todos», y lo contraponía con la situación de sus obreros, marcada por «el excesivo trabajo, las malas habitaciones y la peor alimentación», producto de la avaricia capitalista y los mil y un impuestos indirectos decretados por «los representantes del capital» desde las bancas del Congreso²⁸. El artículo era particularmente duro con Peuser, a quien se le reconocía haber sido un buen patrón, «cuando no poseía una estancia en el Paraguay, ni una quinta en Quilmes; cuando no tenía las dos sucursales que hoy tiene...»²⁹.

Denuncias de este tipo pueden seguirse en las décadas siguientes, que exponen las malas condiciones de muchos grandes talleres. *El Obrero Gráfico* (1907-1911), órgano de la Federación Gráfica Bonaerense, conglomerado surgido en 1907, fue quizás el principal medio de las denuncias³⁰. Casi todos sus números dieron cabida a grandes y pequeñas notas que cubrían las huelgas adelantadas en distintos establecimientos, alentando la solidaridad cuando la ocasión lo precisaba. Así, por ejemplo, casas como Kraft

[28] Redacción de *La Vanguardia* (15 de febrero de 1896). «Algo sobre tipógrafos», *La Vanguardia*, 7, 2.

[29] *Ibid.*

[30] Esta federación se formó a partir de cuatro organizaciones: la Sección Francesa y Alemana de las Artes Gráficas, la Federación de las Artes Gráficas (anarquista) y la Unión Gráfica (socialista), véase Badoza y Tato (2006: 132).

serían comúnmente denunciadas por sus despidos injustificados, por el accionar de sus capataces o por la violación de acuerdos tarifarios³¹. Del mismo modo, importadoras como Curt Berger fueron blanco por sus bajas condiciones de higiene, la ausencia de baños o de ventilación. *El Obrero Gráfico* denunció, además, y con nombre propio, a los trabajadores que rompían huelgas o que causaban problemas en la organización³².

El crecimiento de las sociedades de obreros gráficos alentaría, empero, una también mayor organización del empresariado. El poder adquirido por establecimientos como el de Peuser llevó a la formación del primer gremio patronal gráfico argentino, la Sección Artes Gráficas, que creada en noviembre de 1904 pasó pronto a integrar la Unión Industrial Argentina (UIA). Surgida al calor del clima huelguístico, esta permitió al empresario enfrentar las huelgas generales y ejercer presión sobre los Gobiernos cuando se alentaban políticas aduaneras potencialmente dañinas. Al otro lado de la cordillera, la patronal chilena apareció en un contexto similar. Con motivo de una huelga de tipógrafos de junio de 1906, experiencia que sumó a litógrafos, encuadernadores y prensistas, empresarios como Carlos Helfmann, gerente de la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, optaron por un *lock-out* patronal como fórmula para enfrentar la amenaza de parálisis.

Formada por representantes de las imprentas Barcelona (Ignacio Balcells), Franco-Chilena (Carlos Goffi), La Ilustración (Poblete Cruzat) y de las pertenecientes a Emilio Pérez, Mackenzie, Dietsch y Leblanc, la nueva patronal buscó contrarrestar el accionar de las asociaciones obreras que, agrupadas ahora en la Federación de Trabajadores de Artes Gráficas y dueñas de un mayor poder de negociación —asociado a su tamaño y concentración urbana—, articulaban sus demandas en el contexto más general de las luchas de los trabajadores chilenos. Aunque la tradición huelguística de los tipógrafos se remontaba, según ha mostrado Sergio Grez, a la década de 1870, no fue hasta este momento de mutaciones tecnológicas y

[31] *El Obrero Gráfico: órgano de la Federación Gráfica Bonaerense* (1.º de enero de 1908), 7, 7.

[32] *El Obrero Gráfico: órgano de la Federación Gráfica Bonaerense* (16 de agosto de 1908) 21, 1, 7.

mayor politización cuando alternativas de alianza patronal lograron constituirse formalmente³³.

La aparición de los grandes bloques obreros y patronales en Chile condujo a que muchas huelgas o tentativas de ellas alcanzaran una resolución favorable para ambas partes. Entre 1902 y 1925, por ejemplo, más del 90 % de las huelgas ocurridas dentro del ramo tipográfico chileno fueron solucionadas por la vía de la conciliación, según los datos recogidos por Peter DeShazo³⁴. Si bien no tenemos cifras similares para el caso argentino, el mismo fenómeno alentó convenios que determinaron que el ramo gráfico, a partir de la gran huelga de 1907, mantuviera una relación de tensa calma entre la Sección Artes Gráficas de la UIA y la Federación Gráfica Bonaerense por casi todo el decenio de 1910, época en particular conflictiva dentro del espacio industrial argentino debido a la crisis económica y el incremento de la represión social y política. De acuerdo con Badoza y Tato, la existencia del convenio tarifario establecido entre la patronal y la organización obrera en 1907, que fijaba una tabla de salarios mínimos para todos los trabajadores de imprenta, desde tipógrafos e impresores hasta rayadores y encuadernadores, discriminaba entre oficiales, oficiales-medios y aprendices e imponía una renovación bianual, que empezó a desvirtuarse a partir de 1919, momento en que tanto núcleos obreros como patronales concibieron que el mecanismo de arbitramento no era el más indicado para sus intereses, derivando así en nuevas huelgas que afectaron sobre todo a las empresas periodísticas³⁵.

Como se ha visto, las demandas de las nuevas sociedades hacían evidente el sustrato común de exigencias que atravesaban al conjunto del movimiento obrero. Tanto en Chile como en Argentina, la exigencia de mejores salarios y condiciones laborales en las fábricas fueron elementos transversales y cuyo crecimiento puede seguirse en paralelo con la mayor politización y sindicalización de los núcleos obreros históricos o de aquellos emergentes.

[33] Grez Toso (1997: 470-472).

[34] En DeShazo (2007: 373). En los dos casos restantes, la huelga fue disuelta y los trabajadores tuvieron que volver a trabajar sin haber alcanzado ninguna meta.

[35] Badoza y Tato (2006: 132-134).

Asimismo, no fueron pocas las huelgas originadas por violaciones a convenios o que se adelantaban en solidaridad con boicots presentados en otros ramos económicos. No obstante, la masa de obreros gráficos reflejó en parte de sus pliegos motivaciones que respondían a dinámicas propias de la modernización del sector, que afectaban su propio lugar dentro de los talleres y que golpeaban, en esta medida, su capacidad de negociación. La introducción del linotipo en algunas de las grandes empresas produciría, por ejemplo, un ambiente de temor entre los cajistas, que se veían reemplazados en el corto plazo por la mecanización de su oficio.

En el espacio argentino, la alerta comenzó en 1899, año en que el maestro tipógrafo de origen catalán Antonio Pellicer, redactor de *La Noografía* y abierto defensor del ideario anarquista, empezó a llamar la atención sobre la aparición de la máquina de componer y la posible sustitución de puestos que su arribo produciría en la industria bonaerense:

[...] el año pasado dábamos la voz de alerta a los tipógrafos argentinos respecto a la próxima sustitución del obrero de carne por el de hierro, considerándolo como un hecho fatal del progreso. Hoy podemos decir que este hecho se está realizando entre nosotros. Primero *The Standard*, después *La Nación* y *El Diario*, y se asegura que también *La Prensa*, instalan o instalarán las máquinas de componer sistema Linotype. Operarios escogidos están aprendiendo su manejo para que, al verificarse la sustitución, se cuente con personal instruido y competente. Más tarde efectuarán lo mismo tantas cuantas empresas cuenten con capital para ello. Y el obrero de hierro tomará su puesto definitivamente en la producción gráfica argentina, como lo ha tomado ya en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Austria, Francia y Bélgica, y comenzado a invadir, como aquí, la Italia y la España³⁶.

Como el gran empresariado, Pellicer valoraba el progreso tecnológico. En su visión, la máquina llegaba para dar descanso al hombre «del hercúleo esfuerzo a que se ve obligado para subvenir a sus necesidades». No

[36] Antonio Pellicer (1900). «Las máquinas de componer en la República Argentina». *La Noografía*, 22, 146.

obstante, concebía también que la innovación no sería provechosa para el trabajador si este no lograba consolidar asociaciones poderosas, que le permitiesen defender su lugar y evitar así el «hecho fatal del progreso». En palabras de Pellicer, la fórmula asociación, organización y solidaridad era el requisito de la clase obrera para conquistar las libertades que la tecnología parecía brindarle³⁷.

En efecto, la invención del linotipo por Ottmar Mergenthaler en 1886 constituía un progreso técnico y económico mayúsculo. Por un lado, el teclado incorporado le permitía componer de cuatro mil a seis mil caracteres por hora, creando líneas que reducían el tiempo gastado en este proceso por los componedores. Luego de la impresión, los bloques de líneas tipificados podían retornar a las fuentes, lo que constituía un ahorro material y una mejor calidad de la impresión debido a que se favorecía el uso de caracteres nuevos. El argumento económico era empero el más decisivo. El linotipo podía ser conducido por un único operador, quien con desempeñar el papel de digitador podía reemplazar cuatro o cinco componedores. Así, pues, era comprensible el éxito de la invención entre los empresarios, así como la hostilidad suscitada entre los obreros tipógrafos³⁸.

La introducción de esta nueva tecnología ocurrió justo sobre el cambio de siglo, cobijando especialmente a las empresas periodísticas, siempre más interesadas en ampliar sus tirajes y acelerar la emisión de sus diarios. Para el caso chileno, tanto *El Mercurio* de Santiago como el de Valparaíso contaron con las primeras máquinas de este tipo hacia 1903. Tres años más tarde, firmas como *El Diario Ilustrado*, *El Chileno* y *El Porvenir* adquirieron cada una entre cuatro y cinco linotipos, cifra similar a la que se verá también en algunos periódicos externos al eje central chileno, como *El Sur* y *El País*, ambos de Concepción³⁹. Hacia 1916, unos setenta linotipos se encontraban en operación en el eje Santiago-Valparaíso, según recuento del agente comercial estadounidense Robert Barrett⁴⁰.

[37] *Ibid.*: 147.

[38] Renoult (1991: 31).

[39] Redacción de *Noticias Gráficas* (diciembre de 1905). *Noticias Gráficas*, 6(30), 96.

[40] Barrett (1917c).

En Argentina los experimentos con el linotipo comenzaron, como subrayaba Pellicer, con el periódico inglés *The Standard*, cuyo ejemplo fue seguido por *La Nación* en 1901. El uso del linotipo se normalizaría pronto entre casi todas las empresas periodísticas bonaerenses hacia 1910, al calor de la competencia entre firmas importadoras locales asociadas tanto con la casa Mergenthaler de Estados Unidos como con su rival, la Canadian Linotype de Montreal⁴¹. En 1917, y según conteo del mismo agente Barrett, las empresas periodísticas porteñas albergaban más del doble de linotipos existentes en Chile (alrededor de ciento setenta), la mayoría producidos por la compañía estadounidense⁴².

Tales progresos tecnológicos imponían nuevos retos a los núcleos obreros, que pese a estar mejor organizados y más atentos a las dinámicas de su sector, no podían siempre responder con suficiencia al vértigo de los avances que eventualmente los descalificaban. En un estudio concentrado sobre este último aspecto, Damián Bil ha comprobado cómo la descalificación fue reduciendo el poder de negociación del gremio de cajistas en el caso de Buenos Aires, llevándolos en el mejor de los casos al ejercicio de actividades ajenas a sus conocimientos. Aunque la rápida mecanización del sector incrementó también el trabajo en muchas imprentas, el proceso rompió las rutinas de aprendizaje existentes, atacó la empleabilidad masculina y amplió, en consecuencia, las posibilidades de ingreso de mano de obra femenina, incentivada por la reducción de la fortaleza física en el taller⁴³.

Esta última cuestión derivó en no pocas polémicas tanto en Chile como en Argentina, donde los tipógrafos atacaron la introducción de la mujer en los talleres, acusando problemas de higiene o criticando directamente las habilidades de aquellas que lograban ejercer como linotipistas. Así lo haría un articulista de la revista *Noticias Gráficas* de Santiago en 1909, quien comentando una nota aparecida en *El Mercurio* acerca de la poca atención dada a la formación de linotipistas, recalca que solamente se conocía

[41] En Buenos Aires, la Mergenthaler era representada por la casa Hoffmann & Stocker, mientras que la Canadian era representada por Serra Hermanos.

[42] Barrett (1918: 120-122).

[43] Bil (2005: 15-17).

de mujeres trabajando con linotipos en las imprentas Barcelona y de *El Chileno*, establecimientos donde se atestiguaba:

[...] el mismo defecto que se observa en todos los países, esto es, que, sin contar con que la ocupación no es conveniente al sexo femenino, la mujer compone con tantas faltas (erratas) y con tan mal espaciado, que costaría más la corrección que la composición si su trabajo se dejara debidamente correcto y espaciado⁴⁴.

Dado el tamaño del sector, la presión de los núcleos bonaerenses contra este fenómeno fue mayor, llevándolos incluso a impulsar normativas que prohibían el trabajo femenino. Los argumentos recalcan la dificultad en la tarea mecánica (inexistente en la práctica) y la mala higiene de los talleres, todo sin ocultar un considerable hálito patriarcal. No obstante, la presión obrera logró frenar al empresariado. Como demuestra Damián Bil, firmas como Kraft avalaron el ingreso de las mujeres como linotipistas hacia 1910. Un decreto del presidente Figueroa Alcorta señaló, de hecho, que no era posible prohibir a las mujeres y niños el uso de la innovación, puesto que tal trabajo era: «... sólo una aplicación de la máquina de escribir, de fácil manejo y sin ninguno de los inconvenientes provocados por los vapores de plomo que se desprenden, siempre que la preparación de linotipos se haga a cierta distancia del taller en que trabajan las obreras»⁴⁵.

La entrada del siglo xx representó pues, en estos casos, cambios que entrelazaban lo tecnológico con lo laboral. La industrialización permitió el crecimiento empresarial, pero asimismo la evolución ideológica y organizativa de los obreros. El nuevo paisaje tipográfico mostraba así la presencia de actores que, pese a sus disparidades, mostraban capacidad para configurar fuertes asociaciones obreras y serias contrapartes patronales. En Colombia, este fenómeno estaba todavía lejos de producirse. Aunque una Sociedad Tipográfica de Mutua Protección se formó en Bogotá en 1873, y que el inicio del siglo xx vio a los tipógrafos crear nuevas asociaciones y participar de un joven Partido Obrero (1910), las débiles condiciones industriales del

[44] Redacción de *Noticias Gráficas* (septiembre de 1909). *Noticias Gráficas*, 75, 103.

[45] *Boletín del Departamento Nacional del Trabajo* (1909: 609-610), citado por Bil (2005: 14).

país limitaron el asociacionismo y la agremiación⁴⁶. Como anotó el geógrafo alemán Alfred Hettner durante su viaje a Colombia entre 1882 y 1884, planteando una visión reproducible dos décadas después: «Industria propia no existe todavía, a menos que las pequeñas imprentas y cervecerías se cuenten como tal»⁴⁷.

Conectada con procesos de transferencia tecnológica y de ensanchamiento del mercado internacional, la modernización tipográfica del periodo entre siglos impulsó, sin embargo, un fenómeno que terminó poniendo a empresarios y parte de los trabajadores del mismo lado. En lo fundamental, el crecimiento del aparato estatal y de sus manifestaciones impresas (diarios, boletines, censos, estadísticas, codificaciones, revistas) dio impulso a políticas de ahorro fiscal que buscaron, con menor o mayor éxito, alentar la autonomía editorial de las distintas dependencias estatales, recuperando las imprentas propias o creando nuevas para su uso exclusivo. Traducido a ojos del empresariado en la posible pérdida de su más constante cliente, pero además en un episodio de competencia desleal, este fenómeno prenderá no pocas alarmas.

Las imprentas nacionales y la autonomía editorial del Estado

Hacia el final del siglo XIX, las imprentas de tipo estatal o nacional no eran una novedad. Con pocas excepciones, la historia de la edición en América Latina parte casi que con el inicio mismo de los procesos de independencia y la creación de establecimientos impresores conexos. Se trataba de espacios que debutaban o que bien pasaban de sostener un apellido regio a tomar el «del Estado» o «de Gobierno». Para todos los elencos llegados al poder, la posesión y uso de una imprenta «oficial» valía tanto para efectos

[46] Vanegas (2015). Solo hasta la década de 1920 aparecen asociaciones mejor organizadas, como la Unión de Artes Gráficas y Papelería (1922) y la Sociedad de Linotipistas (1923).

[47] Hettner ([1976] 1888: 91).

de legitimidad interior como exterior. Se trataba, como aparentemente afirmó el mismísimo Napoleón, de «una herramienta poderosa de gobierno»⁴⁸.

Gracias a ellas se podían publicar gacetas, constituciones y reglamentos, así como dar cubrimiento al desarrollo de las campañas militares, las elecciones y la economía. Asimismo, las imprentas oficiales posibilitan la configuración de una imagen simbólica de los nuevos países, funcional a la búsqueda de reconocimiento, de respaldos políticos o préstamos. Las primeras imprentas estatales eran, sin duda, lugares en los que gravitaba una parte de la institucionalidad que buscaba construirse y legitimarse, siendo su desarrollo una preocupación de todos los actores políticos sensibles al control de la información.

Hacia mediados del siglo XIX, sin embargo, las imprentas nacionales sufrieron un estancamiento o incluso un encogimiento, derivado de la reducción de sus responsabilidades a la impresión de algunos folletos y órganos oficiales (estos cada vez menos ideados para un público amplio que para uno especializado en cuestiones políticas o jurídicas). Si bien en países como Colombia algunas nuevas iniciativas «público-privadas» como la Imprenta del Neogranadino (1848), formada por Manuel Ancízar y apoyada por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, se elevaron como medios de propaganda oficial fuertes a mediados de siglo, las otrora imprescindibles imprentas de Gobierno sufrieron una notoria desatención entre 1840 y 1870, desatención que se tradujo en una precariedad técnica en comparación con varias iniciativas privadas.

Las últimas décadas del siglo XIX atestiguaron, sin embargo, intentos de recuperación de las imprentas nacionales por parte de varios Gobiernos, que vieron en su adecuación y uso un considerable ahorro del erario. Esta fue la excusa del gobierno de Aníbal Pinto para reorganizar, vía decreto, la Imprenta Nacional de Chile en 1876. Buscando constituir un espacio útil para la publicación de las piezas de los distintos poderes públicos y, en especial, del *Diario Oficial*, el Gobierno encargó el nombramiento de un director responsable y la contratación de todo el personal necesario para llevar a cabo las distintas tareas editoriales, considerando así la vinculación de

[48] Longeard (2005: 148).

un regente de imprenta, de obreros cajistas y de un corrector de pruebas. Aunque la Imprenta Nacional chilena no había sido tan desatendida como otras en los decenios previos, la reforma de Pinto y las inversiones realizadas por los gobiernos de Santa María y Balmaceda derivaron en su plena actualización para la década de 1890. Según el *Anuario de la prensa chilena*, la Imprenta Nacional fue la primera productora de obras y folletos del país en 1890, y la segunda en 1891, durante la guerra civil. Para mediados de la década, trabajaban en ella dos regentes, dos correctores con sus atendedores, más de cuarenta cajistas y diez maquinistas.

Pese a la nueva situación, el vigor alcanzado por la imprenta estatal comenzó a desvanecerse apenas dos años después del conflicto que derrocó al presidente Balmaceda. Estimulado al parecer por el gremio impresor local, el nuevo Gobierno planteó en 1893 la supresión de la Imprenta Nacional y la consecuente apertura de concursos públicos para la edición del *Diario Oficial*, el *Boletín de sesiones* y el resto de las publicaciones consideradas oficiales. Debido a que el establecimiento funcionaba «sin entorpecimiento», según el propio Gobierno, el proyecto de supresión fue criticado por algunos integrantes del espacio tipográfico santiaguino, como el fotograbador Julián Ramos, quien discutió la medida en la *Revista Tipográfica*. Enfatizando la delicadeza de los trabajos oficiales, Ramos señalaba que la industria privada no debía tener acceso a manuscritos oficiales originales, pues el código penal no entregaba garantías suficientes para evitar «la infidelidad en la custodia de documentos, la falsificación, violación de servicios, etc.». La naturaleza de los documentos oficiales obligaba, en su opinión, a que el Estado fuese «su propio impresor»⁴⁹.

Ramos también desvirtuaba la opinión de que la Imprenta Nacional afectara las finanzas de los talleres y del propio Estado. Por un lado, planteaba que los trabajos realizados en ella antes libraban del abarrotamiento al resto de los impresores santiaguinos, en general muy ocupados. Por otro, afirmaba que la economía perseguida por el Gobierno era apenas aparente, pues la supresión no solo le haría perder el capital previamente invertido

[49] Redacción de *Revista Tipográfica* (1893). «La Imprenta Nacional: proyecto de supresión». *Revista Tipográfica: periódico mensual dedicado al estudio de las artes gráficas*, 5-6, 45-46.

en máquinas y materiales, sino que el sistema de licitaciones tendía a favorecer las propuestas económicamente más bajas, lo que no aseguraba la calidad de las impresiones. Junto con este hecho, el alto número de publicaciones que debían contratarse podía incluso conducir al quiebre de las empresas que lograran hacerse de los encargos, como había sido el caso de España, según indicaba⁵⁰. El fotograbador proponía, en últimas instancias, la reorganización de la Imprenta Nacional mas no su supresión. Según profundizaba, los problemas del establecimiento pasaban por su mala administración, culpa de directores políticos de los que era necesario prescindir para optar por directores técnicos que, ajenos a la competencia industrial y siempre atentos a las innovaciones, podían conducir al mejoramiento del establecimiento y del ramo tipográfico chileno⁵¹.

Con todo, la propuesta de Ramos no alcanzó mayor resonancia. Las publicaciones periódicas oficiales fueron pronto llevadas a licitación y la Imprenta Nacional, aunque no suprimida, pasó a ponerse en arriendo poco tiempo después, limitando su accionar a reglamentos, recopilaciones y algunas obras históricas. En 1911, a casi veinte años de su primera disertación sobre el tema, Julián Ramos republicaría todo lo dicho a propósito de un nuevo debate sobre el grabado y la impresión de sellos y billetes en Chile, una batalla personal del fotograbador, quien creía que el país contaba con las condiciones necesarias para producir sus propios billetes y sellos postales⁵². Tal proyecto embargaba, por supuesto, la reactivación de la Imprenta Nacional, cuya deriva había perjudicado la presentación material de los documentos oficiales y ocasionado más gastos al fisco, pues había supuesto la emergencia de nuevos talleres tipográficos estatales, como la Imprenta de los Ferrocarriles y las de los Ministerio de Guerra, de la Marina y del Estado Mayor General del Ejército, oficinas siempre recelosas de la información que administraban y publicaban.

En este contexto, un último intento de reorganización de la Imprenta Nacional chilena fracasaría en 1913, dejando numerosas obras y folletos

[50] *Ibid.*: 48-49.

[51] *Ibid.*

[52] Ramos (1913).

oficiales al cuidado definitivo de privados, que siempre pendientes de los contratos estatales, sobre todo en materia de libros escolares y útiles para las oficinas públicas, solían enfrentar toda iniciativa que impulsara una eventual autonomía editorial del Estado. Expresión de esto último fue un folleto firmado en 1904 por distintas asociaciones obreras de Valparaíso contra los talleres de las cárceles. Respaldo por la Imprenta Gutenberg, la Federación de Obreros de Artes Gráficas de Valparaíso en cabeza de Clotilde Ibaceta y agrupaciones de encuadernadores, zapateros y carpinteros, el folleto exigía la cancelación de los contratos firmados entre varias oficinas públicas y los talleres carcelarios, esto por configurar formas de competencia desleal⁵³.

Ahora bien, el miedo a la «industrialización» de los establecimientos carcelarios, vistos como fuente de mano de obra gratuita, fue mucho más fuerte al otro lado de la cordillera, donde la penitenciaría bonaerense desempeñó el papel de espacio impresor nacional a lo largo de casi tres décadas. A diferencia de Chile —y también de Colombia— la experiencia argentina no proveía un antecedente claro de Imprenta Nacional. Pese a que las administraciones de Rivadavia y Rosas habían otorgado protección a ciertos talleres, ninguna de estas apuestas pudo hacer germinar un establecimiento de silueta oficial dedicado a imprimir el accionar del Estado emergente. Ni siquiera el inicio del proceso de organización nacional adelantado después de Caseros pudo dotar al experimento argentino de un centro impresor oficial vigoroso. Aunque algunas imprentas desarrollaron plenas funciones oficiales, como la establecida en Corrientes en 1853, su naturaleza coyuntural las asemejó más a los establecimientos efímeros surgidos en el teatro de las revoluciones de independencia que a otros espacios institucionales como la Biblioteca Pública o la Universidad de Buenos Aires, cuyos más claros antecedentes republicanos favorecieron su gradual proyección *nacional*⁵⁴.

[53] S/N (1904). El taller de imprenta carcelario corría en esta época bajo el mando de Augusto Gustoff.

[54] La imprenta de Corrientes fue lugar de encuentro de varias trayectorias relevantes dentro del mundo del libro argentino, como la de Pablo Emilio Coni quien tuvo en arriendo este establecimiento entre 1853 y 1859, ganando allí la experiencia necesaria para fundar años más tarde su propio taller en Buenos Aires. Véase Coni (1921).

En general, a partir de la década de 1860, fueron negocios particulares como las imprentas de Martín Biedma, Pablo Emilio Coni, Carlos Casavalle, Félix Lajouane y las de periódicos como *La República* o *La Nación* las que canalizaron la edición oficial. Aunque eran talleres modestos en sus inicios, estos lograron hacerse con la impresión de boletines estadísticos, gacetas de gobierno, memorias, informes y codificaciones, y también de buena parte de la obra literaria, pedagógica, histórica y política de las élites rectoras de Buenos Aires. De acuerdo con las listas de producción editorial hechas por Alberto Navarro Viola, los trabajos de Biedma y Coni agruparon cerca de la tercera parte (ciento setenta y cuatro) del total de publicaciones contabilizadas para 1882 (quinientas cuarenta y cuatro), mientras que algunos talleres de silueta estatal, como el de la Penitenciaría Nacional, aportaban solo el 2 % (doce).

Entre 1885 y 1887, el contraste entre la producción privada y la oficial continuó siendo marcado. Si bien el peso de los establecimientos de Biedma y Coni pareció disminuir por la expansión del gremio y el aumento de la competencia, la ausencia de un gran taller estatal determinó que casi toda la obra impresa oficial recayera en las manos del empresariado porteño, cuya hegemonía recién comenzó a ser discutida a mediados de la década de 1890, una vez que el taller penitenciario fue objeto de atenciones.

De la mano de los procesos de higienización urbana y de la recepción de las primeras corrientes criminológicas, la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires (1877) pasó por una serie de transformaciones que abarcó casi todo el largo entre siglos. En enlace con algunos derroteros políticos, los ideales de rehabilitación, moralización y trabajo germinaron en la administración de la entonces cárcel nacional, convirtiéndola en un espacio modélico en torno a su régimen disciplinario, pero también en un laboratorio de ciencia criminal y un bastión industrial que causó inquietud en los gremios bonaerenses⁵⁵. Pese a la crisis política y económica que vivía el país a finales de la década de 1880, crisis que desembocaría en la Revolución de 1890, los talleres habilitados dentro de la cárcel sufrieron un proceso de modernización que los situó pronto como primeros proveedores de las oficinas públicas, sus funcionarios y necesidades impresas.

[55] A propósito del caso argentino, véase Caimari (2004).

Hacia 1893, la Comisión de Cárceles comandada por Francisco Ayerza había reactivado todos los talleres existentes en la penitenciaría, que abarcaban los oficios de zapatería, carpintería, herrería e imprenta, y que, hasta esa época, aparentemente, no habían logrado ningún objetivo de enseñanza o rehabilitación para los presos. Durante el mismo año, la Comisión buscó la manera de dinamizar sus talleres centralizando la producción de impresos, uniformes y útiles para algunas reparticiones nacionales, una acción materializada con el Decreto ejecutivo del 17 de mayo de 1893, el cual sancionó, entre otras medidas, la obligación de hacer imprimir en la cárcel todas las obras y publicaciones necesarias para las distintas oficinas públicas, previendo el gran ahorro que podía alcanzarse al quitar estos trabajos a los particulares⁵⁶. El cumplimiento dado a este decreto no fue automático, por lo que la burocracia adscrita al Ministerio de Justicia debió insistir públicamente sobre su pertinencia tres años más tarde y criticó la inclinación de muchos «jefes» por las impresiones lujosas y elegantes, «como si ellas tuvieran algo que ver con la regularidad y eficacia práctica de sus administraciones»⁵⁷.

Las críticas de la oficialidad responsable de la penitenciaría hacían evidente, sin duda, una percepción negativa por parte de algunas dependencias de los trabajos desarrollados por los presos, pero lograron surtir el efecto deseado. Gracias a la ejecución de algunas obras de gran factura y notoriedad, como el segundo censo de la república de 1895 —una edición bilingüe publicada en 1898— y a la adecuación constante de sus talleres, que incluían ya cuartos de encuadernación, litografía y más tarde de fotograbado, el recinto carcelario logró ganar en reconocimiento y absorber paulatinamente buena parte de la producción impresa oficial. Para 1901, sus talleres ejecutaron todas las obras del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y un porcentaje importante de las correspondientes a los ministerios de Marina, Interior, Hacienda, Agricultura, Obras Públicas y Exteriores.

[56] Redacción de *La Prensa* (27 de agosto de 1893). «En la cárcel penitenciaria». *La Prensa*, 6. Durante este año, la penitenciaría ya se encargaba ejemplarmente de la dotación de botas a todos los miembros de la Policía.

[57] Redacción de *La Prensa* (23 de abril 1896). «En las cárceles». *La Prensa*, 5.

Otras dependencias como la Oficina Demográfica Nacional y el Consejo Nacional de Educación también usaron sus servicios, sumando así al ansiado ahorro pretendido por los distintos Gobiernos.

Todos estos progresos agitaron la Sociedad Tipográfica Bonaerense, e incluso a maestros tipógrafos como Antonio Pellicer y Pedro Tonini, quienes prendieron las alarmas desde 1899. Por medio de su revista *La Noografía*, estos declararon abiertamente que los talleres penitenciarios constituían una «competencia oficial». Según señalaban, tanto el Decreto de 1893 como la notable inversión estatal y el hecho tácito de que era imposible competir con una institución que no pagaba mano de obra, ni casa, «ni gas, ni patente, ni nada», llevarían a industriales y obreros «a solicitar una celda del penal para poder trabajar y vivir, pues cada día absorbe más nuestras artes...»⁵⁸. Molestaba también la inmovilidad del empresariado, que no demostraba la unidad necesaria para batallar por sus intereses. Aunque poco después *La Noografía* reportó que diecinueve propietarios de establecimientos gráficos enviaron una protesta al Ministerio de Justicia e Instrucción para evitar nuevas partidas destinadas a la penitenciaría, su rápido archivamiento dio pie a Pellicer y Tonini para continuar reclamando por una unión gremial que permitiera a las industrias privadas plantear una oposición compacta y enérgica ante las Cámaras⁵⁹.

Solo después de 1904, año de creación de la Sección Artes Gráficas, la presión del empresariado se hizo notoria. A raíz de un proyecto de ley que buscaba la creación de una Imprenta Nacional formal en 1905, y que fue positivamente leído por el Senado y pasado a trámite ante la Cámara de Diputados en 1907, la Sección se movilizó solicitando la no sanción del proyecto, o que, de aceptarse, se modificaran los artículos desfavorables al gremio, como la posibilidad de suscripción a las publicaciones oficiales o de producción de obras ajenas a la institucionalidad⁶⁰. Inquietaba además

[58] Redacción de *La Noografía* (mayo de 1899). *La Noografía*, 5, 66.

[59] Redacción de *La Noografía* (octubre de 1900). *La Noografía*, 22, 65.

[60] El proyecto de ley por el que se creó una Imprenta Nacional puede consultarse en el Archivo de la Honorable Cámara de Diputados Nacional (HCDN), Expedientes Senadores, n.º 99 del 25 de septiembre de 1905. Disponible en: <http://apym.hcdn.gob.ar/uploads/expedientes/pdf/99-s-1905.pdf>.

a la patronal que, aunque el proyecto centralizaba muchos talleres estatales, excluía los de la penitenciaría y la Casa de Moneda⁶¹. Luego de un par de años de suspenso, el proyecto volvió a aparecer en los despachos de la Cámara en 1909, momento en que se elevó una nueva protesta, esta vez por parte de la propia UIA, que, respaldando la anterior petición de la Sección Gráfica, solicitó que el proyecto aclarase mediante la consignación de un artículo: «que la futura Imprenta Nacional no podrá en ningún caso efectuar trabajos para el público»⁶².

El accionar de los talleres penitenciarios levantó también molestias en otros espacios. Desde mediados de 1903, el periódico socialista *La Vanguardia* manifestó en sus páginas que, lejos de ser un lugar armónico donde todo era decoro, aseo y actividad febril, según documentaba la prensa burguesa, la penitenciaría era un espacio de explotación, que hacía una «competencia ruinosa a la industria privada y al precio de la mano de obra del obrero libre»⁶³. Según señalaban, los condenados no recibían el pago legal por su trabajo, al tiempo que eran consumidos por jornadas que iban desde las 6 hasta las 17 horas, y a las que debían sumarse luego dos horas adicionales y obligatorias en la escuela interna. Con base en los propios reglamentos del recinto, el periódico exponía que los talleres estaban destinados únicamente a la enseñanza, atributo que era violado para enriquecer las arcas oficiales y los bolsillos de algunos funcionarios⁶⁴.

Más allá de esta crítica, ilustrativa del trasfondo de los progresos vividos por los Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, sus enormes rendimientos eran evidentes. Para 1905, los ciento trece penados que en ellos trabajaban, divididos entre cajistas (ochenta y cuatro) y maquinistas (veintinueve), permitían al fisco ahorrar casi la mitad de sus gastos asociados a la impresión de boletines oficiales. En palabras del ministro de Justicia,

[61] HCDN, Expediente Particulares n.º 518, 11 de septiembre de 1907. Disponible en: <http://apym.hcdn.gob.ar/uploads/expedientes/pdf/518-p-1907.pdf>.

[62] HCDN, Expediente Particulares n.º 239, 16 de junio de 1909. Una versión digital puede consultarse en: <http://apym.hcdn.gob.ar/uploads/expedientes/pdf/239-p-1909.pdf>.

[63] Redacción de *La Vanguardia* (22 de agosto de 1903). *La Vanguardia*, 84, 1-2.

[64] *Ibid.*

la producción de estas publicaciones con los privados alcanzaba un costo de \$ 83 114, mientras que por la penitenciaría se habían pagado solamente \$ 37 000^[65]. Para 1912, las ganancias eran tales que lograban costear, entre todos los talleres, el presupuesto entero de la cárcel⁶⁶. Los cuadros proporcionados por los informes anuales solían además relevar el beneficio que traía para el Estado el uso de la fuerza impresora carcelaria, pronto dividida en dos talleres especializados, uno destinado a las obras generales y otro a los boletines (véase la tabla 2).

TABLA 2. Producción de los Talleres de Imprenta de la Penitenciaría Nacional (valores en miles de pesos)

Año	Impresión de obras		Impresión de boletines	
	Valor en plaza	Beneficio para el Estado	Valor en plaza	Beneficio para el Estado
1911	69 829	25 182		
1912	59 503	19 824	164 020	103 420
1913	183 581	110 822	167 948	107 684

Fuente: Gómez (1914).

TABLA 3. Trabajos ejecutados para las reparticiones nacionales y la propia penitenciaría

Año	Destino	Obras	Ejemplares	Páginas de texto impresas	Páginas de estadística impresas
1915	Reparticiones	54	55 950	8 521 000	2 033 800
	Penitenciaría	5	9 800	1 413 700	9 900
1917	Reparticiones	23	24 160	4 221 300	2 718 700
	Penitenciaría	7	2 900	335 800	9 600

Fuente: Penitenciaría Nacional (1916 y 1918). *Informe correspondiente al año 1915 e Informe correspondiente al año 1917*. Buenos Aires: Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional.

[65] Redacción de *La Nación* (30 de julio de 1905). «La Imprenta de la Penitenciaría». *La Nación*, 4.

[66] Gómez (1914: 63).

El vigor alcanzado por los Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional permite su comprensión, en su funcionamiento, como la verdadera imprenta nacional de Argentina, con todo y la discusión sobre la creación de un establecimiento propiamente *nacional*. Producto del uso de mano de obra prácticamente gratuita, y de su constante ensanchamiento y modernización, el establecimiento podía contarse entre los principales talleres de imprenta de Buenos Aires para 1915, hecho que explicaba las preocupaciones de los industriales y justificaba las denuncias aparecidas en *La Vanguardia*, que advertían la cada vez más intensa absorción de mano de obra penada, y a pesar de la implementación de un sistema de pago por destajo en 1912^[67].

Con todo, la penitenciaría comenzaría a debilitarse hacia 1917. Como se muestra en la tabla 3, los trabajos de imprenta destinados se redujeron a menos de la mitad en comparación con los de 1915. Dos razones parecen explicarlo. En primer lugar, el incendio ocurrido en marzo de 1916, el cual consumió parte de los talleres de imprenta y encuadernación, provocando la pérdida de trabajos en proceso y materiales de difícil recuperación⁶⁸. En segundo, las discusiones sobre la posible fundación de una imprenta nacional derivaron, antes que en su creación, en la concentración de responsabilidades sobre otras imprentas oficiales, como la de la Casa de Moneda. Gracias a la ley de presupuesto sancionada en 1915, la Casa de Moneda se había convertido en el ente rector de los gastos destinados a la edición de obras oficiales de todas las reparticiones estatales, con la excepción de los talleres carcelarios, lo que significó su consagración como unidad impresora central. Para 1917, esta empleaba a doscientos cuarenta trabajadores, un cuarto de ellos mujeres, y se encaminaba a ser el más importante establecimiento impresor del Estado⁶⁹.

El ascenso de la Casa de Moneda pareció frenar, pues, la temida expansión comercial de talleres penitenciarios, que debido a su rendimiento

[67] *Ibid.*

[68] Sobre las pérdidas ocasionadas por el incendio, véase Redacción *La Vanguardia* (10 de marzo de 1916). *La Vanguardia*, 3.

[69] Barrett (1917b: 29-30).

competían directamente por la clientela que solía encomendar sus trabajos a los mayores establecimientos del periodo en Buenos Aires, como Peuser o Kraft. Debe subrayarse también que el crecimiento de este empresariado a lo largo de la década de 1910 pudo, probablemente, tranquilizar sus ánimos frente a la autonomía editorial del Estado, pues ya le era posible prescindir de este como un cliente principal o determinante.

Experiencias como la de Argentina muestran el peso de la expansión del mercado local en el reacomodamiento del espacio tipográfico, que ve al Estado apartarse gradualmente del escenario debido tanto a la especialización de sus actividades editoriales como a la mayor autonomía del sector comercial, que ya no depende de él para mantenerse a flote, pero que permanece atento a su posible conversión en un competidor no deseado. El miedo al Estado documenta, de este modo, no tanto un temor a la pérdida de un gran cliente sino al nacimiento de un gran rival. Tal situación antagonizaba, ciertamente, con la experiencia chilena, pero contrasta ante todo con la experiencia colombiana, que dueña de una tradición de imprentas nacionales más o menos continua, vio para finales del siglo XIX una Imprenta Nacional moderna y reorganizada, que materializaba la idea según la cual el Estado debía ser su propio impresor. Afirmada sin aparentes reclamos por parte del empresariado local, su conformación hizo evidente la reducida fuerza de este gremio y, con ello, la menor silueta industrial del país en comparación con los demás casos.

En general, las imprentas denominadas «de Gobierno» o «de Estado» fueron parte integrante de la vida política y periodística colombiana desde las revoluciones de independencia. Ellas dieron origen a las gacetas y publicaciones oficiales y semioficiales que buscaron formar y conducir la opinión pública republicana, convirtiéndose no pocas veces en los bastiones de algunas facciones llegadas al poder, como la de Santander en su momento o la de Tomás C. de Mosquera y Manuel Ancizar, ya antes referida. No obstante, desde que la primera imprenta propiamente oficial fue constituida a mediados de la década de 1820, su administración no ambicionó la constitución de un establecimiento apéndice orientado a publicar las obras producidas por los agentes del Estado. Con pocas excepciones, fue la lógica del arrendamiento la que caracterizó su andar por casi todo el

siglo XIX, aspecto que estimuló a varios miembros del pequeño gremio impresor bogotano⁷⁰.

Ni siquiera la impulsiva década de 1870, que vio configurar como nunca antes las ambiciones instructoras y editoriales dentro de la burocracia colombiana, dio cuenta de políticas reorganizadoras en torno a la imprenta estatal. Desde 1867, la «Imprenta de la Nación» fue puesta por contrato en manos de distintos privados, como Medardo Rivas y Fernando Pontón, quienes debieron comprometerse a publicar —a bajo costo— las memorias ministeriales anuales, los mensajes presidenciales, todas las compilaciones de leyes requeridas, los esqueletos de pasaportes y billetes y, especialmente, las ediciones del *Diario Oficial*, inaugurado en 1864. En general, el sistema presentaba aspectos favorables para ambas partes, puesto que mantenía la constancia en la producción de obras vitales para la propaganda y administración de los Gobiernos, al tiempo que generaba ingresos a los contratistas, quienes también podían destinar la maquinaria a producciones no oficiales.

El sistema no estuvo, sin embargo, exento de límites y problemas. La tardía recepción de originales o el abarrotamiento de la propia imprenta por la acumulación de trabajo condujo no pocas veces a la contratación de otros talleres para poder cumplir las obligaciones. La continuidad de esta práctica originó incluso conflictos legales, como el iniciado por el procurador general contra Medardo Rivas, administrador de la Imprenta de la Nación entre 1867 y 1872, quien fue acusado de violar su contrato al llevar trabajos a particulares, un hecho que ocasionaría, según el procurador, una pérdida para el fisco que Rivas debía reparar. Si bien el proceso prosperó a favor del administrador, este hizo evidente que la Imprenta destinada a la oficialidad no estaba en capacidad de cumplir por sí sola con la impresión de todas las obras comprometidas. Las limitaciones técnicas salieron además a flote entre los argumentos expuestos por Rivas en su defensa. Según señalaba, muchos secretarios evitaban publicar sus *Memorias* en la Imprenta de la

[70] La más larga excepción ocurrió entre 1854 y 1866, momento en que la Imprenta de la Nación pareció desempeñarse como una unidad propiamente institucional, dependiente de la Secretaría de Interior. Durante esta etapa, la Imprenta sumó a sus deberes la publicación del *Diario Oficial* desde 1864.

Nación debido a que sus tipos totalmente gastados impedían que las ediciones saliesen buenas, aun poniéndoles todo el esmero posible⁷¹.

A la necesidad de cuidado en la edición oficial, advertida por Rivas, se añadieron además límites asociados al crecimiento natural del aparato estatal, que ocasionaba lógicos incrementos en la producción. No sobra recordar que las décadas de 1860 y 1870 fueron particularmente intensas en el proceso de organización de los distintos países. Tanto en Colombia como en el resto de la región, se trató del periodo que vio despuntar los más ambiciosos y duraderos proyectos de construcción estatal. Si los estados latinoamericanos ejercieron efectivamente como «productores de principios de clasificación», por tomar la definición de Pierre Bourdieu, lo hicieron justamente a partir de este periodo, con todo y los conflictos existentes⁷². Tales ejercicios tuvieron, según se ha mostrado, una amplia traducción impresa, visible en anuarios, censos, presupuestos, informes y libros de instrucción, pero también en los más comunes informes y boletines oficiales; toda una masa de producciones originalmente manuscritas que debía, una vez derivadas a las imprentas, adoptar formatos, extensiones y tirajes disímiles que podían sobrepasar las voluntades de regentes y cajistas y, por ende, el andamiaje técnico disponible.

Ahora bien, los problemas que enfrentaba la arrendada Imprenta de la Nación de Bogotá no levantaron debates sobre la reformulación de su funcionamiento. La posibilidad de su plena incorporación como unidad estatal no parece haber sido ni siquiera contemplada en la década de 1870. Para finales de 1873, pocos meses después del juicio iniciado a Medardo Rivas, la Imprenta de la Nación solo reportaba la publicación del *Diario Oficial* y de la *Revista de Colombia*, mientras que talleres privados como los de José Benito Gaitán y Echeverría Hermanos, dos casas principales de la capital, se encargaban de imprimir periódicos oficiales como el *Diario de Cundinamarca*, *La Escuela Normal*, *El Maestro de Escuela* y los *Anales de la Universidad*; es decir, los medios más representativos del momento liberal y su proyecto instructor⁷³.

[71] Rivas (1872).

[72] Bourdieu (2012: 280-281).

[73] Navarro (3 de diciembre 1873: 91).

La caída del liberalismo en la década de 1880 logró abrir, empero, nuevos caminos hacia la fundación de una imprenta plenamente estatal. El ascenso al poder del ala radical del Partido Conservador, que derivó en la instalación de nuevos derroteros políticos y económicos e implicó la instalación de un nuevo programa cultural para Colombia, determinó asimismo cambios en torno al control de la información oficial. Liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, el proyecto político encarnado por la Regeneración buscó desarmar el orden construido por los liberales desde 1863, caracterizado por su sistema federal, la plena libertad de imprenta y asociación, la educación secular y la economía librecambista. En contraste, el nuevo régimen propendió por la instalación de políticas relativamente proteccionistas, la imposición de límites a la prensa, el retorno de la educación a la Iglesia y la adopción de un sistema centralista que sometiera el resto de las unidades políticas que hasta 1886 componían los Estados Unidos de Colombia.

Sobre el último de estos objetivos es que iniciativas como la Imprenta Nacional cobraron pertinencia. La desintegración del sistema federal obligó la construcción de una serie de capacidades institucionales sin las cuales la pretendida centralización política y administrativa no habría sido alcanzada. Dos de las innovaciones más importantes en este sentido fueron la creación del Ejército Nacional y la apertura del primer Banco Nacional, que buscó plantar cara a la banca privada, generalmente asociada a los cuadros liberales. La creación de una Imprenta Nacional resulta, ciertamente, un hecho menor al lado de estas iniciativas, pero compartía con ellas tanto la visión reorganizadora del Estado como la mayor intervención de este sobre el espacio político y sociocultural. El periodo presidencial de Miguel A. Caro (1892-1898), responsable de la creación de la nueva entidad impresora, fue el ejemplo más autoritario de esta última dimensión.

Si ya la nueva Constitución de 1886 había reinstalado los delitos de imprenta y sistema de juicio por jurados, el gobierno de Caro dispuso medidas mucho más policivas para con la prensa opositora⁷⁴. Basado en el artículo 42,

[74] En cierta medida, Caro también devolvía el daño que había sufrido en materia de libertad de expresión durante los Gobiernos liberales, que habían clausurado su periódico y rematado su imprenta en 1876. Véase Valderrama Andrade (1972).

que establecía que la prensa era libre «en tiempo de paz pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social, y la tranquilidad pública»⁷⁵, el entonces presidente buscó frenar todas las críticas dirigidas a su administración, que siempre leídas en clave revolucionaria derivaron en la suspensión de periódicos y la pérdida de los derechos políticos de sus responsables (redactores e impresores)⁷⁶. Tal vigilancia del mundo impreso atentó, por supuesto, contra el normal desarrollo de los talleres, que vieron buena parte de sus encargos censurados o suspendidos. La cercana relación de algunos talleres con miembros del Partido Liberal o del conservatismo moderado agravaría aún más la situación, pues las medidas aparecieron como ataques frontales a la oposición.

En medio de este ambiente de estrechamiento de la vida periodística, la fundación de la Imprenta Nacional resultó útil a la publicitación del nuevo régimen. Además de ser consecuente con el resto de las políticas que endurecían el modelo centralista, la tenencia de un establecimiento impresor garantizaba la presencia de la voz oficial en un espacio público trastocado por las nuevas leyes. La fundación de este nuevo espacio se haría, adicionalmente, sobre los vestigios de un viejo bastión liberal: la imprenta de Echeverría Hermanos, taller cuyo origen marcaba el ascenso mismo del liberalismo en la década de 1850 y cuya adquisición por el gobierno de Caro representó un golpe simbólico a sus rivales. Transformado en la Imprenta Nacional por el Decreto Ejecutivo 504 del 18 de mayo de 1894 y finalmente reorganizado «bajo la inmediata inspección del Ministerio de Gobierno» por el Decreto 52 del 27 de enero de 1896, el nuevo y *nacional* establecimiento inició un periplo que se ha prolongado hasta nuestros días.

La actividad de la nueva Imprenta Nacional bajo los gobiernos de la Regeneración y durante la guerra de los Mil Días expone la importancia que tuvo para el régimen. De acuerdo con el catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia, la Imprenta Nacional publicó alrededor de doscientos treinta títulos librescos entre 1894 y 1903, una cifra similar a la alcanzada por

[75] S/N (1886a: 11).

[76] Véanse el Decreto 151 de 1888 (Ley de los Caballos) y los Decretos ejecutivos 315 de 1892, 231 de 1896 y la ley 157 de 1896.

la Imprenta de La Luz —taller cercano al conservatismo—, pero que duplicaba o triplicaba, según el caso, la producción de imprentas particulares como las de Medardo Rivas, Zalamea Hermanos o Samper Matiz. Si bien la edición de obras oficiales caracterizó buena parte del conjunto, la Nacional dio también cabida a alegatos judiciales, trabajos geográficos e históricos, tesis de medicina, trabajos lingüísticos y compilaciones poéticas. En el mismo lapso la Nacional lanzó también publicaciones periódicas como el *Anuario estadístico comercial* (1897-1917), el periódico semioficial *El Orden Público* (1899-1900), el oficial *La Opinión* (1900-1902) y los *Anales del Senado* (1903-1945), entre otros órganos surgidos en el contexto bélico, como *La Rebelión* (1899-1900) o el *Boletín oficial de guerra* (1900)⁷⁷.

Finalizada la guerra de los Mil Días, la Imprenta Nacional incrementó aún más su actividad. Gracias al ambiente de reconciliación política y conmemoración nacional que giró en torno a 1910, esta se convirtió en el órgano impresor de círculos como la Academia Colombiana de Historia, cuya primigenia colección denominada Biblioteca de Historia Nacional imprimió, no sin dificultades, desde 1902. El establecimiento también dio a la estampa diferentes tratados sobre límites y cuestiones diplomáticas que, impulsados por la reciente «pérdida de Panamá» y el peso de Estados Unidos en dicho proceso, buscaron afirmar y defender la soberanía del país en algunos territorios limítrofes como la Amazonía.

El programa de publicaciones que pasó a la órbita de la Imprenta Nacional colombiana rompió pues, a lo largo de las primeras décadas del siglo xx, el patrón estándar de publicaciones oficiales que los anteriores modelos habían patentado. Si bien el establecimiento continuó con la publicación de obras esenciales como el *Diario Oficial*, los géneros se ampliaron a la historia, los tratados e incluso la literatura, como lo demuestra la publicación de títulos como *Poesías y Fábulas y verdades* de Rafael Pombo en 1916, todo un vasto y plural conjunto que se uniformó editorialmente con el encabezado de «República de Colombia», siempre impuesto en cada portada.

[77] Otros periódicos que imprimió fueron *El Carácter: órgano de la Juventud Nacionalista* (1895); *El Empresario: literatura, ciencias, artes, comercio, industria y agricultura* (1896); *El Centro: órgano del Directorio Nacionalista de Cundinamarca* (1897-1913) y *La Patria: periódico político y noticioso* (1902).

La continuidad operativa de la Imprenta Nacional y la expansión de sus géneros publicados documentaba, en esta medida, su definitiva conversión en una oficina que tenía bajo su responsabilidad la producción y circulación de la información oficial. La atención dada al nuevo establecimiento en materia de recursos y tecnología atestiguan también su mayor consideración dentro del nuevo modelo estatal. Hacia 1907, las máquinas comenzaron a renovarse casi por completo, lo que aumentó su capacidad de producción y permitió la creación y actualización de sus talleres de encuadernación y de litografía. En 1911, la Nacional adquirió además sus primeros linotipos marca Mergenthaler, convirtiéndose en una de las primeras en contar con dicha invención en el país. Según Tarcisio Higuera, el *Diario Oficial* comenzó a ser compuesto con esta nueva maquinaria apenas fue instalada, momento en que ya tres de los empleados cajistas dominaban su uso⁷⁸. El impacto del linotipo sería tal que el pie de imprenta para el *Diario* y otras publicaciones emanadas de la Nacional pasó a verificarse como «Linotipo de la Imprenta Nacional».

En síntesis, a diferencia de los casos argentino y chileno, la poca fuerza del empresariado de imprenta colombiano le permitió a la Imprenta Nacional afirmarse no solo como un establecimiento enquistado en la estructura estatal sino como un espacio garante de la propia autonomía editorial del aparato que la contenía. Desplegadas desde 1896, las raíces de la Imprenta Nacional colombiana ya se encontraban arraigadas a las jerarquías administrativas y financieras del Estado colombiano para 1910, momento en el que además logró diversificar sus producciones. La historia de la Litografía Nacional, unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada para el mismo periodo de la producción de estampillas de timbre, es un ejemplo más de la articulación de parte del núcleo humano productor de textos e imágenes al funcionamiento del Estado. Así, pues, Colombia vio aparecer, para inicios del siglo xx, una burocracia de imprenta que, aunque dueña de un reconocimiento relativo, logró mantenerse hasta el día de hoy como una de las principales responsables de la representación impresa del Estado.

Las últimas décadas del siglo xix representaron el punto de partida de un nuevo régimen tipográfico para los tres países aquí analizados. La

[78] Higuera (1970: 260-261).

industrialización del mundo impreso, nunca general en sus tiempos ni uniforme en sus características, estuvo asociada, según el caso, a cambios políticos y económicos que ayudaron a crear las condiciones de posibilidad primarias para la renovación de las prácticas impresoras y editoriales, pero también hubo procesos socioculturales que catalizaron estas mutaciones. El impacto de los procesos migratorios, traducido básicamente en la movilidad de personas, saberes y capitales, implicó no solo el crecimiento de un gremio que, hasta la década de 1870 se asemejaba aún cuantitativa y cualitativamente a aquel presente en la primera mitad del siglo, sino también, y sobre todo, una renovación de sus rostros, de su relevancia comercial y hasta de las relaciones laborales que contenía. El factor migratorio alentó la constitución de empresas y la dinamización de sus capitales y produjo incluso mutaciones «desde abajo», propiciando giros en la organización de los trabajadores.

Asimismo, el lugar de la imprenta en los dominios del Estado también atestiguó reconfiguraciones. El avance en los procesos de construcción estatal determinó en todos los casos el inicio de esfuerzos por dotar al aparato estatal de mayor autonomía editorial. Las razones tenían que ver con temas como el ahorro en el gasto público, pero también con la reactivación del credo en torno al resguardo de la información oficial, su apropiada elaboración y circulación. No obstante, esta búsqueda se vio pronto disputada en aquellos espacios donde la vitalidad del empresariado de imprenta era resonante. Usuales contratistas de las oficinas estatales, los grandes talleres privados buscaron imponer límites a la actividad de las imprentas oficiales y lograron éxitos visibles en Argentina, donde el interés político por construir un establecimiento nacional se diluyó en paralelo a la presión de las patronales gráficas.

TABLA 4. Las imprentas nacionales/oficiales: momentos claves

Establecimiento	Reorganización	Auge	Declive
Imprenta Nacional de Chile	1876	1880-1891	1893
Talleres Gráficos Penitenciaría Nacional	1880	1890-1915	1917
Imprenta Nacional de Colombia	1894	1896-1920	Vigente

Fuente: Elaboración propia.

En contraste, en Chile y Colombia fueron las dinámicas políticas las que alentaron o desalentaron su evolución. Para el primer caso, la caída de la Imprenta Nacional conecta con el fin de la época Balmaceda y su proyecto de extender el tamaño y el vigor del Estado. Su clausura hacia 1893 coincide, por lo demás, con la expansión del empresariado local, de la mano de imprentas como las del Universo de la familia Helfmann, la Barcelona de Balcells, o la Universitaria de Adeodato García Valenzuela, que entre las décadas de 1890 y 1900 obtuvieron derechos para editar censos y otras producciones oficiales, tomando o recuperando, según cada caso, un cliente que habían perdido lustros atrás.

La situación colombiana fue radicalmente inversa. El giro conservador que derivó en la Constitución de 1886 llevó a la construcción de una Imprenta Nacional propiamente dicha una década después, lo que implicó el abandono del sistema de arrendamiento y consolidó un espacio dedicado al cuidado editorial de la documentación oficial. El abrigo institucional le permitió a este nuevo espacio convertirse en un lugar de recepción de innovaciones tecnológicas como el linotipo, proceso que en escenarios como el chileno o el argentino lideraron los privados. En este sentido, la organización de la Imprenta Nacional colombiana significó un empuje hacia la autonomía editorial del Estado, pero también un salto de calidad en cuanto a la modernización del aparataje tipográfico local.

La industrialización de la esfera tipográfica determinó, en fin, la configuración de un mundo impreso nuevo en cada uno de los casos estudiados. Los agentes, talleres, prácticas y producciones que irrumpen durante el periodo de entre siglos documentan, en su conjunto, el renovado estado del paisaje comercial, material y laboral sobre el que la producción de materiales impresos se enraizaba. Con todo, el fenómeno migratorio y las dinámicas del comercio transnacional, junto con las distintas políticas de instrucción pública de cada país o la voluntad cívica de círculos sociales y científicos, activaron otras renovaciones en los espacios de circulación y recepción de libros e impresos, entre ellos las bibliotecas y las librerías. Como veremos ahora, el tiempo de la transformación tipográfica coincidió con el de la sofisticación del comercio librero y de la expansión de las bibliotecas, señalando un momento de modernización general para los diferentes actores y espacios dedicados al libro.

Lugares del saber: las bibliotecas

Junto con las imprentas y litografías, las bibliotecas y librerías conforman el conjunto de espacios más representativo del mundo impreso. Se trata de los lugares que mejor encarnan los procesos de producción, circulación y recepción de impresos, elevándose, por lo mismo, como unidades interdependientes dentro de un circuito mayor de movimientos y agentes. Para las élites letradas latinoamericanas, protagonistas de la vida social y política y también productoras de literaturas de orden, la conciencia de esta relación entre los espacios productores y divulgadores de la palabra escrita, de ideas y saberes era plena.

Para Sarmiento, la cuestión librera era, de hecho, vital en la construcción del sistema educativo que ambicionaba para Argentina y todo el continente. Conocedor de sistemas de instrucción pública como el francés, que nutría los estantes de maestros y alumnos con las producciones de casas editoras y librerías especializadas, Sarmiento expuso con regularidad sus deseos de encomendar al mercado internacional del libro los materiales necesarios para expandir las primeras letras y conformar bibliotecas públicas acordes a los avances científicos que consideraba oportunos¹. Polígrafos menos famosos como Pedro Pablo Figueroa resaltaron, por su parte, el papel que los libreros habían desempeñado en la dinamización de la vida intelectual chilena. Según afirmaba, el desenvolvimiento cultural que había

[1] Sarmiento (1883).

caracterizado la década de 1840 estaba atado al desarrollo de las primeras librerías en el país, surgidas en esta misma época y pronto convertidas en espacios de «vulgarización rápida de las ciencias y de las artes». De las librerías, aseguraba, habían surgido también «las bibliotecas populares, que han sido otros tantos talleres de jeneralización de conocimientos para el progreso nacional»².

El caso colombiano expone con mayor claridad la relación entre librerías y bibliotecas, al menos al nivel de la nomenclatura política que las conectó. Poco antes de redactar la conservadora Constitución de 1886, Miguel A. Caro no solo ocupaba el cargo de director de la Biblioteca Nacional, institución que buscó organizar bajo parámetros modernos, sino que fue también el principal socio de la Librería Americana, uno de los primeros establecimientos de Bogotá. Sus sucesores José Vicente Concha y Miguel Abadía Méndez alcanzarían también la presidencia del país en el siglo xx, cuestión que, aunque no hace de las librerías trampolines al ejecutivo, sí expone la continuidad de la relación entre saber y poder en un país particularmente convulsionado.

La presencia de bibliotecas y librerías en las reflexiones y ocupaciones del mundo letrado exponía, en cierta medida, el lugar en los imperativos socioculturales que venían guiando los debates en torno a la construcción nacional. Temas como la cuestión civilizatoria y educativa, los procesos de homogeneización cultural o la necesidad de nuevas formas de sociabilidad, repercutieron en la fundación y organización de las bibliotecas, afectando los géneros y títulos que estas debían acumular, catalogar y promover en relación con la afirmación de una identidad colectiva determinada. El *fluir* de las librerías mostró afectaciones similares. La mayor demanda de literatura útil durante los Gobiernos liberales dio cuenta de una considerable expansión del universo de lo legible sobre las últimas décadas del siglo xix, expansión que no solo hizo evidente la modernización del ramo librero, sino que conectó sus intereses con los de la burocracia instructora y le permitió aprovechar rutas de internacionalización antes inexistentes.

[2] Figueroa (1894b: 10).

El examen de las bibliotecas y librerías parte también de un criterio conceptual. Para Frédéric Barbier, las bibliotecas pueden entenderse como instituciones de transferencia, esto es, como lugares que facilitan la circulación del conocimiento y su apropiación³. Adjudicable también a las librerías, esta definición señala la existencia de dos modalidades de transferencia propias a estos lugares, una asociada a los contenidos y otra a las prácticas. La primera subraya su función como transmisoras de información originada «en el presente», contemporánea o inmediata a sus usuarios, pero también de aquella temporalmente distante, producida «en el pasado». Esta modalidad acentúa la función patrimonial de las bibliotecas y la especialización anticuaria de algunas librerías. Al mismo tiempo, estos lugares ofrecen contenidos ajenos al entorno cultural de sus usuarios, aspecto remarcado en las publicaciones vertidas en lenguas extranjeras que acumulan y ofertan. Este primer tipo de modalidad releva, en resumen, la pluralidad temporal, geográfica y lingüística de los libros contenidos, así como su condición móvil.

Alejándose de la dimensión impresa, el segundo tipo de modalidades subraya las transferencias que ocurren a nivel de su concepción y representación material, las cuales documentan el constante y transnacional tráfico de modelos para su gestión y construcción, y la adopción misma de técnicas leídas como indispensables para su manejo y actualización bajo estándares modernos⁴. En el caso de las librerías, las transferencias de prácticas pueden aparecer sujetas a su naturaleza comercial. En América Latina, la conexión con el mercado internacional del libro derivó tanto en la ampliación de los títulos ofertados como en la adopción de estrategias publicitarias que dotaron al ramo de una formalidad desconocida antes de 1870. La normalización del uso de etiquetas y sellos por parte de los libreros, junto con el constante uso del catálogo y el boletín como principal medio publicitario pueden verse como el resultado de procesos de transferencia en clave comercial que alinearon las librerías locales a los parámetros mundiales.

[3] Barbier (2015: 25).

[4] *Ibid.*: 26-27.

Los capítulos dedicados a los lugares del saber de Argentina, Chile y Colombia plantean así una comparación entre orígenes, periodos de expansión y modernización. En este capítulo, las bibliotecas centrales son las protagonistas. Parte de las instituciones nacionales más prematuras, las bibliotecas públicas y nacionales instaladas en las capitales, no solo tuvieron una función en la representación de los nuevos valores políticos que buscaban exhibir las repúblicas como territorios ilustrados, sino que lograron constituirse, desde mediados del siglo XIX, en nichos de acumulación bibliográfica, preocupados por la disposición del libro e involucrados, por lo mismo, con el trabajo universitario y la producción de saberes funcionales para la construcción estatal.

Luego de comparar la historia de estas instituciones, los apartados siguientes profundizan sobre sus momentos de modernización. Interesa observar cómo las bibliotecas fueron pensadas y orientadas por las élites rectoras de cada país, las cuales fijaron sus atribuciones como instituciones de transferencia y lugares destinados al cultivo y la difusión de saberes. Distinguiremos primero entre las experiencias chilena y argentina, cuyos itinerarios fueron más paralelos, para luego dedicar un apartado a la experiencia de la Biblioteca Nacional colombiana, cuyos momentos de sofisticación exhiben etapas muy bien marcadas por los dos elencos políticos que se disputaban la dirección del país.

En el capítulo siguiente, que dedicaremos a las librerías, el recorrido desde los orígenes también se hará presente, buscando no solo describir la transición de aquellos pequeños comercios de libros constituidos en los comienzos republicanos a librerías «formales» sobre las décadas de 1880 y 1890, sino también allanar las dinámicas locales y globales que les permitieron componer un ramo comercial potente para este último periodo. A diferencia de las bibliotecas, interesa relevar las rutas de especialización de las librerías y su renovada capacidad publicitaria, visible en la profusa producción de catálogos e incluso en sus inmersiones en el oficio editorial. Tal como en el caso de la esfera tipográfica, el periodo entre los siglos enmarca en buena medida la consolidación institucional de la esfera bibliotecaria y la sofisticación del comercio de librería en América Latina, aun pese a las carencias materiales y los todavía bajos índices de alfabetización. Se trata

así de mostrar cómo estas instituciones lograron integrar y extender la geografía cultural e intelectual de las ciudades e impactar, por tanto, en su cotidianidad.

Las bibliotecas centrales: acumulación y disposición

Durante el periodo de entre siglos, el crecimiento de las bibliotecas centrales latinoamericanas, de sus fondos, responsables y responsabilidades, no conectó con su personificación en espacios decididamente acordes a su tentativa función pública y nacional. No cabe duda de que este fue uno de los problemas fundamentales de estas instituciones. Luego de su nacionalización, la Biblioteca Nacional Argentina tuvo una sede relativamente moderna recién en 1901, en un edificio ideado en un inicio para la Lotería Nacional, pero en el que pudo operar hasta 1992. El actual edificio de la Biblioteca Nacional Chilena, pensando como un «Palacio para los Libros», puso su primera piedra en 1913, pero la demora de más de diez años en su construcción dejó para 1925 su definitiva puesta en marcha. La Biblioteca Nacional de Colombia, por su parte, apenas pudo trasladarse a un edificio arquitectónicamente apropiado en 1938, emplazamiento en la que perdura hasta el día de hoy, al igual que su par chilena. El rezago en la construcción de edificios apropiados respondía, por supuesto, a problemas financieros propios de cada país, pero también, y en mayor medida, al incierto y generalmente debatido lugar que estas instituciones culturales debían ocupar dentro de los entramados estatales, cuestión que derivó en sus constantes mudanzas físicas y administrativas.

Sin mayores objeciones, las bibliotecas centrales de los tres países analizados compartieron durante todo el siglo XIX y el comienzo del XX el carácter de instituciones vagabundas, tanto material como institucionalmente. Dicho de otro modo, su consagración pública como recintos de la historia, las ciencias o las artes nacionales, patente en discursos, proclamas, crónicas y también en políticas y reglamentos, no determinó su consagración político-administrativa, ni su temprano posicionamiento entre las urgencias de los Gobiernos.

Por todo lo anterior, no deja de sorprender que estas mismas instituciones hayan patentado una relativa modernización desde la medianía del siglo XIX, visible en sus prácticas y procesos de gestión interna, pero también en su dimensión aglutinadora y transmisora de saberes locales y foráneos. La vocación universalista, propia de las más grandes bibliotecas del mundo como la *Bibliothèque Nationale Française* o la perteneciente al *British Museum*, no fue ajena a las bibliotecas latinoamericanas, ni a sus más importantes directores o impulsores. Una breve mirada cuantitativa al progreso de sus fondos expone las ambiciones acumulativas, así como sus propias falencias en la gestión del volumen de materiales que pasaban a resguardar.

De las tres bibliotecas en cuestión, solo la colombiana poseía un antecedente colonial. Consecuencia de la expulsión de la Compañía de Jesús y la expropiación de sus bienes, la biblioteca pública de Santafé de Bogotá fue abierta en 1777 con alrededor de cuatro mil volúmenes. Su bautizo nacional ocurrió en 1822, por orden de Francisco de Paula Santander, quien propició también un primer intento de organización y la primera transferencia notable bajo el nuevo régimen: la correspondiente a la biblioteca de José Celestino Mutis, conjunto bibliográfico otrora aprovechado por la comunidad ilustrada neogranadina. Para este periodo, la Biblioteca Nacional colombiana contaba con alrededor de doce mil volúmenes, cifra no muy superior a la de su par chilena, que, mucho más nueva, poseía ya diez mil para la misma época. En contraste, la Biblioteca Pública de Buenos Aires albergaba a la misma altura poco más de diecisiete mil volúmenes, una cifra notable dada su reciente creación en 1810, pero que se derivaba de una activa mecánica de donaciones que había despuntado desde 1812^[5].

A pesar del empuje inicial, no fue hasta la sanción de las leyes de depósito legal en la década de 1830 que las colecciones de las distintas bibliotecas centrales comenzaron a nutrirse de títulos nacionales con relativa constancia. Con la excepción del espacio bonaerense, que durante la época de Rosas atestiguó una suerte de parálisis, la sanción de estas normas en Chile y Colombia, en ambos casos durante 1834, impuso a las bibliotecas su primera gran responsabilidad como unidades estatales, convirtiéndolas en

[5] Parada (2009).

centrales de la acumulación de los impresos producidos localmente. Dicho en otras palabras, fueron las normativas como las del depósito, o aquellas derivadas de los decretos sobre la propiedad artística y literaria, las que otorgaron una silueta «nacional» a estas bibliotecas.

Sobre la mitad del siglo, los fondos de las bibliotecas chilena y colombiana se habían duplicado. La primera contaba casi con veinticuatro mil volúmenes en 1859, mientras que la segunda contaba con poco más de veintidós mil en 1855^[6]. La biblioteca bonaerense fue la única en manifestar bajas para este momento, pues de los diecisiete mil volúmenes que decía albergar en sus inicios solamente aparecieron unos quince mil en 1854^[7]. La recuperación de esta última institución fue, no obstante, bastante rápida en el mediano plazo. Si en 1866 manifestaba una recuperación de su fondo inicial con el reporte de 18 000 volúmenes conservados, en 1883 se contarán 32 600 y diez años después un total de 62 707^[8]. En 1899, el vicedirector de este establecimiento informaba a la autoridad ministerial la tenencia de 80 562 volúmenes⁹. Sin duda, elocuente de su crecimiento, el tamaño de la cifra advertía, empero, el rezago de este espacio frente a instituciones más estables en su andar. La Biblioteca Nacional chilena reportaba ya para 1886 más de 100 000 volúmenes conservados, una cuantía que incorporaba, muy seguramente, parte de los miles de volúmenes sustraídos de la Biblioteca Nacional del Perú durante la ocupación de Lima en el contexto de la guerra del Pacífico, una tipología de «adquisición» por botín de guerra que, valga resaltar, había sido atípica en el contexto latinoamericano¹⁰.

Para la década de 1890, únicamente la Biblioteca Nacional de Colombia presentó retrocesos en sus fondos. Debido al acercamiento del régimen conservador imperante con la Iglesia católica, refrendado con la firma del

[6] Sobre el crecimiento de las colecciones chilenas, véase Catalán y Jorquera (1995).

[7] Véase un recuento sobre la evolución de este fondo en Groussac (1901).

[8] Véase un seguimiento a estos datos también en Lucero (1910: 18).

[9] *Ibid.*: 19.

[10] Aunque la cifra de volúmenes sustraídos no es clara, Ignacio Domeyko documenta la recepción de al menos diez mil solo para la Universidad de Chile en 1881. Véase Godoy Orellana (2011).

Concordato con la Santa Sede en 1887, se establecieron medidas que determinaron, buscando reparar viejas confiscaciones a los conventos, la salida de miles de libros del establecimiento. En números brutos, 11 477 volúmenes fueron trasladados de la Biblioteca al Seminario Conciliar en 1894, acción que redujo el acervo de la institución a unos 38 500 volúmenes, cifra que representaba poco más de la mitad de los resguardados por su par argentina en la misma época¹¹.

En el siglo xx, los esfuerzos por contar las obras albergadas se redujeron al mínimo. La más constante entrada de nuevas obras, junto con los más frescos intereses por medir el número de ingresos, usuarios y materias leídas anual o mensualmente, llevaron a que los bibliotecarios concentraran sus esfuerzos en la organización de colecciones y salas, el arreglo de catálogos o la producción de publicaciones propias, muchas de las cuales exponían su modernizada silueta. De todos modos, es vital comprender de dónde procedían los distintos conjuntos bibliográficos que, al incrementar los fondos, imponían dificultades espaciales, pero así mismo nuevos derroteros organizacionales.

La dinámica adquisitiva: donaciones y canjes

En general, la política de adquisiciones de las bibliotecas centrales estuvo guiada por el pragmatismo y la fortuna. Los momentos de salto acumulativo durante el siglo xix respondieron más a donaciones o compras de bibliotecas personales que a adquisiciones derivadas de sus necesidades. La primera generación de catálogos se vincula, de hecho, con fallecimientos de personalidades y donaciones que representaron grandes transferencias librescas. Este fue el caso de la «librería» de Mariano Egaña, jurisconsulto chileno fallecido en 1846, cuya compra y traslado a la Biblioteca Nacional implicó una suerte de rebautizo de la institución. El catálogo resultante es ilustrativo, en la medida en que se intituló como *Catálogo alfabético i por*

[11] Álvarez (1894: 154).

materias de las obras que contiene la Biblioteca Nacional Egaña, aspecto dicente del empalme entre la institución y su primera gran colección¹².

La experiencia colombiana fue similar. La adquisición de la colección del coronel Anselmo Pineda, tramitada en 1851, implicó la reconstitución de la Biblioteca Nacional como un lugar ideal para la escritura de la historia nacional. A diferencia de colecciones como la de Egaña, la de Pineda comprendía todo el periodo republicano. Más un aficionado que un letrado de ascendencia, Pineda había recolectado un inmenso acervo de impresos surgidos en el periodo revolucionario, por lo que además de libros y periódicos, su colección agrupaba folletos, panfletos, circulares, sueltos y demás efímeros despreciados¹³. Dadas sus características, la adquisición dio a la Biblioteca una exposición mediática nunca vista, que despertó el interés por la escritura de una «historia nacional auténtica», al tiempo que impulsó la publicación de sus primeros catálogos entre 1855 y 1856. Creados en paralelo al proceso de arreglo y catalogación de la colección Pineda, estos primeros catálogos se dividieron por lenguas (francés, inglés, español y latín) y manejaron una organización interna por orden alfabético y de materias¹⁴.

Debido a su nacionalizada lectura, las adquisiciones de bibliotecas personales como las de Egaña y Pineda determinaron el comienzo de una seguidilla de nuevas transferencias que sumaron a los fondos «nacionales». Fuese mediante la compra o la donación, esta última acción cargada de mayores efectos simbólicos, las bibliotecas centrales absorbieron algunas de las más importantes colecciones privadas existentes en el siglo XIX. Nombres como los de Benjamín Vicuña Mackenna (1606 vols.), Claudio Gay (800 vols.), José Ignacio Eyzaguirre (4122 vols.) y Andrés Bello (1500 vols.) integraron parte de la nómina de figuras cuyas «librerías» se transfirieron

[12] Publicado en 1860, este dio cuenta de los casi nueve mil volúmenes traspasados. En 1854, bajo la administración de Francisco García Huidobro, fue publicado el *Catálogo por orden alfabético de los libros que contiene la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile*, que con doscientas dieciséis páginas constituyó el primer gran catálogo formal de la institución.

[13] Murillo Sandoval (2016a).

[14] Sobre la fabricación de otros catálogos dentro de la Biblioteca Nacional de Colombia, véase López Arévalo (2016: 97-101).

a la Biblioteca Nacional de Chile¹⁵. En Bogotá, las colecciones de Manuel Ancízar (700 vols.) y Joaquín Acosta (181 vols.) hicieron lo propio.

Ahora bien, esta relación entre adquisiciones y reactivaciones operativas de las bibliotecas nacionales no tuvo su correlato en el espacio rioplatense, donde la Biblioteca Pública de Buenos Aires conoció sus primeros catálogos formales durante la gestión de Vicente G. Quesada, quien ofició como su director a lo largo de la década de 1870. Aunque la biblioteca contaba con algunos inventarios y catálogos manuscritos, la labor de Quesada legó una serie de operaciones administrativas novedosas y actualizadas según las técnicas bibliotecológicas europeas que, continuadas por otros directores, como Manuel A. Trelles (1879-1884), José Antonio Wilde (1884-1885) y en especial por el bibliotecario de origen francés Paul Groussac (1885-1930), crearon las condiciones de posibilidad para la publicación de sus primeros catálogos metódicos entre 1893 y 1932^[16].

El más tardío proceso de «nacionalización» de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, logrado recién con las leyes de federalización de la ciudad puerto en 1880, fue otra característica que distinguió su evolución de las bibliotecas centrales chilena y colombiana, especialmente en lo concerniente a la consagración de la institución como órgano aglutinador de toda la producción impresa de origen nacional. No obstante, aspectos como la dinámica de adquisiciones y los problemas que de esta misma se derivaban, representados en la falta de espacios apropiados para gestionar los volúmenes acumulados, tendieron a ser uniformes en todas las instituciones, que además de tener que lidiar con compras, donaciones y públicos, comenzaron a enfrentar otro tipo de adquisición, la representada por el canje bibliográfico.

Si bien este fenómeno conectivo se examina con profundidad en el capítulo 5, un repaso por sus características se hace necesario. En general, la política del canje bibliográfico representó una de las grandes apuestas

[15] Catalán y Jorquera (1995: 136-137).

[16] El ritmo de estas publicaciones fue el siguiente: vol. I. *Ciencias y artes* (1893); vol. II. *Historia y geografía* (1900); vol. III. *Literatura* (1911); vol. IV. *Derecho* (1915); vol. V. *Ciencias y artes, parte II* (1919); vol. VI. *Historia y geografía* (1925) y vol. VII. *Literatura, parte II* (1932).

de interacción intelectual y bibliotecaria del siglo XIX latinoamericano. Inspirada en proyectos como el sistema de canje fundado por el Smithsonian Institute cuyas operaciones despegaron en la década de 1850, esta práctica tuvo por objetivo quebrar el aislamiento que caracterizaba a los países de la región, que desconocían la producción científica y literaria de sus vecinos, pero que estaban, irónicamente, casi al día con aquella procedente de Francia, Inglaterra o Estados Unidos.

Como tal, las primeras experiencias de canje de publicaciones oficiales se dieron entre Chile y Colombia en 1866. Bolivia y Argentina se unieron luego a la práctica, y luego Uruguay y Perú. El comienzo de este proceso sería, sin embargo, lento e irregular, por lo que una vez abiertos varios frentes de intercambio la Biblioteca chilena planteó la necesidad de hacer del canje una práctica formalizada. En una carta dirigida al rector de la Universidad de Chile, el bibliotecario Ramón Briceño explicaba los beneficios de extender el canje a todo el continente en términos civilizadores, pues estos enriquecerían la biblioteca, permitirían el mejor conocimiento de Chile en el extranjero, fecundarían las relaciones científicas y servirían, finalmente, como una correspondencia «de pueblo a pueblo», que cultivaría «la ilustración y la fraternidad de las naciones americanas»¹⁷.

Oportunidades similares se consideraron en Colombia, donde luego de comenzados los canjes, y por solicitud del bibliotecario José María Quijano Otero, se decretó la apertura de una oficina especial para la actividad dentro de la Biblioteca Nacional en 1868^[18]. En las consideraciones al decreto, se apeló a la poca circulación de las obras colombianas en el exterior y al carácter ilustrado de la idea. Como primera tarea, el entonces bibliotecario reunió cuatrocientos libros, con los cuales organizó remesas idénticas para enviar a Santiago, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Lima, Río y Washington. El nuevo decreto extendió igualmente las tareas del bibliotecario a otros ámbitos, permitiéndole enviar cajones de libros a «bibliotecas,

[17] Carta de Ramón Briceño a Ignacio Domeyko, Santiago, 15 de junio 1869, Archivo Nacional Histórico de Chile (ANH, en adelante), Fondo Biblioteca Nacional de Chile, t. 10, ff. 26r-27v.

[18] Sancionado el 23 de enero de 1868, el decreto establecía el envío de veinticinco ejemplares de cada publicación oficial a la Biblioteca Nacional, todo con miras a constituir los distintos despachos para cada uno de los países involucrados. En Quijano Otero (1869: x11).

librerías i empresas tipográficas europeas» y, además, recomendar la compra de obras no oficiales para destinar al canje¹⁹. La flexibilización de los títulos canjeados trató de estimularse años después por iniciativa del entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, Juan María Gutiérrez (1809-1878), quien en carta dirigida al bibliotecario colombiano, pidió que excitara a los libreros y editores colombianos para que remitiesen a Buenos Aires todas las obras que salieran de sus imprentas, pues según él, podían encontrar en esta ciudad un mercado favorable²⁰.

A pesar de que los deseos del intelectual argentino no se materializaron en este momento, lo cierto es que el canje significó, durante la década de 1870, la mayor ruta de comunicación e intercambio cultural entre las repúblicas americanas, sus universidades y élites letradas, al tiempo que se convirtió en una de las principales formas de acumulación para las bibliotecas centrales de los diferentes países.

Las mutaciones en materia de gestión interna que se derivaron de los canjes, como la creación de oficinas dedicadas expresamente a gestionar las obras a intercambiar, se percibieron en varias instituciones, que también comenzaron a publicar catálogos específicos de las obras que recibían o despachaban. Esta última particularidad fue notoria en Chile, donde en 1871, por iniciativa del bibliotecario Ramón Briseño, fue fundada la Oficina General de Canjes Bibliográfico-Internacionales. A instancias de esta, Briseño publicó catálogos que documentaron las remesas de libros dirigidas a Brasil en 1871 (3944 vols.) y 1873 (272 vols.)²¹; a Argentina en 1872 (1330 vols.), 1874 (1350 vols.) y 1875 (1088 vols.) y a Italia y Uruguay en 1874 (1725 y 1228 vols. respectivamente)²². En paralelo, Briseño editó un catálogo de las obras

[19] *Ibid.*

[20] Carta de Juan María Gutiérrez al bibliotecario nacional de Colombia, Buenos Aires, 26 de octubre de 1869, Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Archivo Histórico siglo XIX, t. 1[6], 1868-1876, ff. 2r-5v.

[21] De la cantidad correspondiente a 1871, 2534 volúmenes se destinaban a Felipe Lopes Netto y 1410 al Instituto Histórico y Geográfico de Río de Janeiro. Véase Briseño (1871).

[22] Briseño (1879: 27-28).

brasileñas recibidas por intermediación del cónsul Lopes Netto (872 vols.), todas empastadas y disponibles para su consulta en 1873^[23].

La edición de este último catálogo no reflejaba, sin embargo, la realidad del intercambio bibliográfico ocurrido. Tan solo la primera remesa dirigida desde el entonces Imperio en 1871, canalizada también por Lopes Netto, abarcaba los tres mil volúmenes, cifra que la convertía en la principal transferencia bibliográfica dada en este periodo, así como en la mayor adquisición en bloque de la Biblioteca Nacional de Chile por estos años. Solo para subrayar la magnitud del envío, de acuerdo con el *Primer suplemento anual al Catálogo jeneral impreso*, la Biblioteca había comprado durante 1872, tanto en Europa como en Estados Unidos, poco más de seiscientos volúmenes, esto es, la quinta parte de lo enviado por Brasil un año atrás.

De cualquier modo, la producción de catálogos en este periodo fundacional del canje testimoniaba, en buen grado, el éxito de la estrategia de conexión y de los propios intercambios en concreto, los cuales pasaron a representar una tipología de adquisición superior a la realizada por vías comerciales. Por otra parte, los flujos alentados por el canje dinamizaron otros aspectos de la cotidianidad bibliotecaria, como el uso dado a las obras duplicadas, cuya utilización para el canje se convirtió en una fórmula puntual de liberación de espacio en el interior de las bibliotecas, o la estimulación del cumplimiento de las políticas de depósito legal por medio de la publicitación del canje como una práctica que abonaría al reconocimiento de los escritores locales en el extranjero. La masiva recepción de obras del vecindario condujo, asimismo, a la construcción y continua actualización de los fondos bibliográficos, generando en la mayoría de los casos la conformación de las colecciones de Obras Americanas que hoy conocemos, agrupaciones todas relativamente uniformes en cada institución.

La puesta en marcha del sistema de canjes implicó, en fin, una serie de actividades que contribuyó a sus procesos de manejo, su reconocimiento internacional e incluso el propio autoconocimiento de sus fondos y colecciones. La pertenencia de algunas de estas instituciones a las universidades nacionales proveyó a su vez, durante la década de 1870, una visión distinta

[23] S/N (1873a).

de su función, que las ligó al trabajo científico e intelectual nacional y las comprometió a ser instituciones útiles para la divulgación por fuera de los límites nacionales. En los casos de Chile y Colombia, discutir sobre las bibliotecas nacionales era también tratar sobre las universidades nacionales.

Hacia inicios del siglo xx, las bibliotecas nacionales pasaron pues a presentarse como los espacios del saber ideales para activar programas de reconocimiento internacional, con todo y las aún fuertes carencias materiales y espaciales que las caracterizaban. La ausencia de «libros modernos» en la Biblioteca Nacional de Colombia fue, por ejemplo, un hecho informado por sus bibliotecarios durante todo el momento de primigenia internacionalización, demostrando así cómo, pese a la notable acumulación, la población usuaria continuaba demandando libros que las bibliotecas no siempre disponían.

El despegue del saber bibliotecario en Argentina y Chile

En las últimas décadas del siglo xix, una parte considerable de los problemas que podrían considerarse técnicos en el interior de las bibliotecas nacionales comenzaron a ser enfrentados por administraciones cada vez más competentes en la gestión de los libros resguardados y su puesta al servicio de los lectores. La plena modernización en esta materia fue, sin embargo, un proceso lento y dificultoso. Como lo documentan los trasteos de las bibliotecas a nuevos y apropiados edificios en el siglo xx, su conversión en lugares idóneos para el trabajo intelectual y científico fue un objetivo que tardó más de un siglo en alcanzarse por completo. Lo que vemos en el periodo en cuestión es, ante todo, una dinámica de transferencias de prácticas que, tal como las transferencias de contenidos, dejaron marcas en las bibliotecas, potenciando su funcionamiento, su reconocimiento y su propia naturaleza pública. En otros términos, fue sobre el final del siglo xix que las bibliotecas centrales lograron, a pesar de sus límites, adoptar parámetros de funcionamiento mundializados, que sumaron a su estatus y justificaron, décadas después, la inversión de fondos públicos en la construcción de palacios pertinentes para su desenvolvimiento.

De todos los casos, el de la Biblioteca Nacional de Chile muestra el proceso de modernización más sostenido en el tiempo. La larga administración de Ramón Briseño, entre 1864 y 1887, legó trabajos notorios en este nivel, como la *Estadística bibliográfica de la literatura chilena*, obra que representó el diagnóstico más completo de la producción intelectual chilena visto a la fecha. Publicado su primer volumen en 1862, este abarcaba el periodo de 1812 a 1859 y estaba constituido por tres partes generales: «Impresos chilenos», «Obras sobre Chile» y «Escritores chilenos», todas nutridas por catálogos o apéndices que presentaban las piezas identificadas de forma alfabética, cronológica o por materias. El segundo volumen de la *Estadística*, publicado en 1879, continuaba la revisión entre 1860 y 1876. Este amplió el número de apartados de la obra, separando los catálogos alfabético y cronológico y generando uno propio para los periódicos. Este incluyó además un apartado dedicado a rectificar datos del primer volumen y otro denominado de «Curiosidades bibliográfico-chilenas, más o menos útiles para la gente estudiosa», que incluía un catálogo que daba visibilidad a las obras privilegiadas por la ley de propiedad literaria de 1834^[24].

La obra de Briseño constituyó, sin duda, un acontecimiento bibliográfico en lo concerniente a la evolución del «movimiento intelectual» del país. Pensada y organizada en clave nacional, los dos volúmenes fueron leídos y felicitados como muestrarios del trabajo intelectual chileno y aportes al conocimiento de lo propio. El papel de la Biblioteca Nacional en su ejecución resultaba además evidente. Más allá de constituir el principal archivo consultado, Briseño exculpó a la institución de cualquier imperfección presentada, que sería un yerro, según él, de los impresores, que no habían «obedecido los preceptos legales» de entregar a intendentes o gobernadores dos ejemplares de cada impreso para su remisión a la Biblioteca, o de estos últimos funcionarios que no cuidaron de redirigir los materiales recibidos a la institución²⁵.

[24] Sobre la recepción de la *Estadística*, algunos extractos publicados por el mismo Briseño resultan ilustrativos, véase Briseño (1879: v111).

[25] Ramón Briseño (1862: v11).

Aunque la obra de Briseño no determinó transformaciones en el interior de la Biblioteca, la mediatización asociada a su aparición, pertinencia y calidad implicó una revalorización de esta institución y sumó al prestigio de su responsable. La empresa demostró, adicionalmente, el valor de la Biblioteca para ámbitos como el Consejo de la Universidad, que desde 1859 favorecía la publicitación de su actividad con repaos mensuales de su movimiento en los *Anales de la Universidad de Chile*. En lo fundamental, los agradecimientos de Briseño en el primer volumen de su *Estadística bibliográfica* demuestran el respeto dado a la Biblioteca Nacional por actores incluso no académicos, como el intendente de Santiago, el único entre todos, según el bibliotecario, que logró «interponer eficazmente su autoridad para con los dueños de imprenta de esta capital, a fin de que me facilitaren registrar sus archivos i hacer mis apuntes»²⁶.

En suma, Briseño dejó el cargo con una alta reputación y la biblioteca con una alta valoración. Para 1885, dos años antes de su salida, la institución mostraba además la concurrencia de alrededor de ocho mil lectores anuales, cifra interesante si ponderamos que el edificio en el que operaba disponía apenas de una sala para veinticinco asistentes. El traslado de la institución a un edificio más amplio en 1887 representaría, empero, el momento de reorganización más importante antes de su traslado definitivo en 1925. Realizado bajo la dirección de Luis Montt, entre 1886 y 1906, esta etapa legaría una institución organizada bajo las técnicas bibliotecarias en mundialización.

De acuerdo con Sol Serrano, durante la administración de Montt la Biblioteca Nacional manifestó un crecimiento multinivel, que comprendió el número de lectores (multiplicado por tres entre 1886 y 1907), la cantidad de suscripciones a revistas y periódicos extranjeros (de 37 a 100 entre 1887 y 1909) y el número de obras consultadas (de alrededor de 25 000 en 1887 a más de 70 000 en 1906). Si bien patentan un bache entre 1897 y 1904, los datos examinados informan un crecimiento adicional²⁷. En efecto, la información recogida y publicitada por la institución durante la gestión de

[26] *Ibid.*: XIII.

[27] Serrano (2014: 105-107).

Montt dio cuenta de una evolución notable. Desde su primer año, el movimiento de la Biblioteca fue registrado de manera sistemática dentro del *Anuario de la prensa chilena*, publicación cuya primera época se extendió de 1887 a 1914. A comienzos del siglo xx, el *Boletín de la Biblioteca Nacional* se sumó como publicación institucional, alcanzando los noventa y dos números entre 1901 y 1913.

Ambas publicaciones buscaron solventar distintas demandas. Si el *Anuario* buscaba continuar los esfuerzos bibliográficos iniciados por Briseño, concentrados en dar un seguimiento a la producción editorial chilena y llevar el conteo de las obras registradas bajo la ley de propiedad literaria, el *Boletín* surgió en un momento de mayores interrogantes respecto a la Biblioteca, su función pública y la cuestión social que se asentaba en el país. En concreto, el *Boletín* respondía a las críticas vertidas por una Comisión de Vigilancia, unidad configurada para estudiar y organizar la manera en que la Biblioteca debía funcionar. Integrada por historiadores y hombres políticos como José Toribio Medina, Domingo Amunátegui y Federico Puga Borne, la Comisión expuso los límites de la institución en lo referente al público que la usufructuaba. Para esta, la Biblioteca debía atender a la ciudadanía en general, objetivo que no lograba debido a su horario habitual de funcionamiento, entre las 10:00 y las 17:00 horas, que evitaba que estudiantes, empleados públicos, y obreros pudieran acceder a ella. El *Boletín* parecía enfrentar, sin embargo, problemas de conocimiento público acerca del acervo de la institución y su movimiento, cuestión que el *Anuario*, debido a su naturaleza estadística, no podía satisfacer.

La reforma de los horarios se concretó apenas un año antes de la salida de Montt, en 1905, con el establecimiento de un servicio nocturno entre las 20:00 y las 22:00 horas. Según Serrano, el público visitante promedio fue de 6270 lectores entre 1905 y 1909, cifra que por supuesto afectó el total de usuarios lectores de la Biblioteca. De acuerdo con los datos recogidos por Sebastián Hernández, este aumentó un 85 % durante el primer año de servicio²⁸. Aunque no podemos refinar estas últimas cifras, es posible argüir una apertura de la institución a nuevos grupos lectores en los comienzos

[28] Hernández, S. (2014: 126).

del siglo, grupos que aglutinaban sectores medios emergentes, de origen escolarizado y formación profesional, pero también a trabajadores deseosos de mayor instrucción.

Además de potenciar la relativa democratización de la institución, la dirección de Montt impulsó otros cambios relevantes. Por un lado, secciones hasta hoy presentes, como la «Chilena» y la «Americana» se formaron durante su gestión, que también vio la puesta en marcha de la sección «Manuscritos» y su agrupación con los archivos de «antiguos jesuitas de Chile»²⁹. Por otro, puso en marcha un nuevo programa de Lectura a Domicilio. Inspirado en las bibliotecas estadounidenses, este benefició a unos ocho mil lectores en 1907 y a más de doce mil en 1916. Lejos de administrar libros antiguos o valiosos, el servicio privilegió obras modernas en ediciones baratas que, debido a su popularidad, argüía Montt, podían ser aprovechadas por artesanos, empleados, mujeres y demás grupos no habituales de la biblioteca³⁰. Creado en 1887, este servicio ilustra, ciertamente, la nueva relación que la institución planteaba con los nuevos lectores, antes excluidos de las salas de lectura debido a los preconcepciones institucionales en torno a sus gustos literarios.

Al momento del centenario de 1910, la Biblioteca Nacional mostraba, pues, un rostro moderno. Finalizada la gestión de Montt, sería Carlos Silva Cruz (1910-1927) el encargado de plasmar esta evolución en una edificación nueva y apropiada. Con base en criterios de utilidad, decoro y representación nacional, este inició los movimientos administrativos y financieros que posibilitaron la apertura, en 1925, del palacio para los libros tan deseado por bibliotecarios, escritores y los viejos y nuevos públicos lectores.

Ahora bien, si el caso de la Biblioteca Nacional de Chile representó el proceso de modernización más gradual, así como el más efectivo a nivel «nacional», el adelantado en la Biblioteca Pública de Buenos Aires dio cuenta del intento de cambio más radical e intelectualmente riguroso, aun pese a su prolongación en el tiempo. Iniciado por la administración de Vicente G. Quesada, el proyecto de reorganización de la biblioteca se condujo a partir

[29] S/N (1891).

[30] Serrano (2014: 112).

de ejercicios comparativos sobre el funcionamiento de las principales bibliotecas europeas, los cuales buscaron documentar sus características materiales, servicios y objetivos, e identificar aquellas importables a suelo americano.

Extendida de 1871 a 1879, la dirección de Quesada dejó cambios sustanciales para una institución que, en su opinión, tenía la condición de un gran depósito y no de una biblioteca³¹. Entendida como un barómetro que debía marcar «la civilización y cultura de un pueblo»³², la institución reclamaba cambios que debían actualizar su funcionamiento a los parámetros mundiales, pero asimismo ayudar a convertirla en un establecimiento central de la vida cultural y científica. En esta medida, y no obstante su adscripción al Gobierno provincial, la dirección de Quesada marcó el comienzo de la conversión de la Biblioteca Pública de Buenos Aires en la biblioteca central de la geografía cultural argentina, un proceso no obstante verificado en 1884.

En lo fundamental, la gestión de Quesada puede dividirse en cuatro etapas: (1) de estudio del estado de la institución, iniciada con su nombramiento en 1871; (2) de investigación europea, adelantada durante su viaje a Europa entre 1873 y 1874; (3) de investigación continental y de reformas prácticas, desarrollada a su retorno a Buenos Aires entre 1875 y 1877, y (4) una última etapa en la que elabora y presenta su proyecto de reglamento y reorganización del establecimiento, entre 1878 y 1879. La parte investigativa de este itinerario se plasmó en el estudio *Las bibliotecas europeas y algunas de la América Latina* (1877), obra que representó el primer gran estudio comparativo de las grandes bibliotecas europeas realizado en América Latina y la piedra angular del ulterior proyecto de reglamento, publicado en 1879 con una corta tirada de cien ejemplares³³.

En términos prácticos, las investigaciones de Quesada implicaron un proceso de transferencia de saberes bibliotecológicos sin precedentes. Hasta el momento de su viaje, la «ciencia de las bibliotecas» parecía ser

[31] Quesada (1879: 4).

[32] Quesada (1877: 15).

[33] Quesada (1879).

desconocida para el entonces bibliotecario, e incluso para buena parte de los actores inmersos en la expansión bibliotecaria ocurrida en Argentina para la misma década³⁴. Sus esfuerzos por clarificar la diferencia entre la biblioteconomía y la bibliotecografía, por ejemplo, junto con su interés por estudiar aspectos organizativos y no históricos respecto de las instituciones visitadas, como sus sistemas de catalogación, las características del personal o los presupuestos, hacían evidente no solo un proceso de documentación y divulgación notable, sino también de autoaprendizaje con relación al funcionamiento del tipo de espacio que lideraba y la necesidad de orientar su gestión en términos prácticos y útiles³⁵.

Ejemplo de lo anterior fue su investigación dentro del espacio latinoamericano. Aunque en su estudio afirmó que habían sido pocos los datos levantados de las bibliotecas nacionales del vecindario, hecho que quizás incidió en la no publicación del segundo tomo dedicado a este espacio, las indagaciones de Quesada reposan en algunos archivos, dando cuenta de sus numerosos interrogantes sobre el manejo de las bibliotecas y sus ansias de contrastar sus trabajos con los realizados en instituciones similares en edad, objetivos y problemas. Así, por ejemplo, Quesada dirigió en octubre de 1875 al bibliotecario nacional chileno un cuestionario que buscaba extraer todo tipo de información en torno a la biblioteca santiaguina. Entre otras cosas, le interesaba conocer el número de volúmenes y manuscritos conservados, el sistema de clasificación y catalogación aplicado, las horas de apertura, el número y categoría de los empleados, si existía préstamo externo, si los editores o autores estaban obligados a llevar sus libros a la Biblioteca, cuál era el presupuesto destinado a la compra de libros, si el edificio había sido adaptado, si existían medidas contra las polillas y hasta si los estantes tenían vidrio para proteger los libros del polvo³⁶.

[34] Por esta expansión nos referimos al fenómeno de creación y puesta en marcha de las bibliotecas populares argentinas, instituciones que sin ser centrales desempeñaron un papel determinante en la normalización de la actividad bibliotecaria y la democratización de la lectura en Buenos Aires y otras provincias.

[35] Quesada (1877: 17-19).

[36] Carta de Vicente G. Quesada a Ramón Briseño, Buenos Aires, 28 de octubre de 1875, ANH, Fondo Biblioteca Nacional de Chile, t. II, s/f.

Las primeras reformas adelantadas en la Biblioteca Pública corrieron, en efecto, alrededor de estas cuestiones, tan asociadas a la disposición física de los materiales impresos como a la manera en que debían ofrecerse al público. El arreglo material del edificio, de sus salas y estantes supuso, empero, la primera tarea a desarrollar. A la puesta de nuevas y más amplias estanterías y la creación de la primera sala de obras americanas, se sumaron el ensanche de las salas, la construcción de una nueva sala de lectura y más tarde la confección de nuevos inventarios; todas refacciones que condujeron al cierre de la institución por periodos intermitentes a lo largo de la década. Las reformas espaciales no evitaron, sin embargo, el crecimiento de los lectores. Si en 1872 la institución contaba 2504 visitantes, la cifra casi fue triplicada en 1876 con 6192 lectores reportados y alcanzaría los casi 7000 para 1880; cantidad ya cercana a la de su contraparte chilena para la misma época³⁷. Tal evolución respondía, en efecto, al nuevo manejo de la institución, que además incrementaba continuamente sus adquisiciones. En 1875 fueron adquiridos, por ejemplo, 3581 volúmenes, cifra mayor a la suma de los adquiridos en los seis años siguientes³⁸.

Otras unidades adecuadas por Quesada fueron la oficina de canjes y el departamento de publicaciones oficiales. No obstante, Quesada percibía límites considerables, como el vinculado a la catalogación, puesto que carecía de colaboradores y no dejaba de señalar a sus superiores cómo en Europa o Estados Unidos estas tareas eran desempeñadas por «hombres y mujeres exclusivamente dedicados a esta operación»³⁹. Con todo, la cuestión de la catalogación hizo patente con más claridad la transferencia de parámetros modernos de gestión al espacio bonaerense. Guiada por preguntas sobre el cómo debía organizarse y funcionar una biblioteca pública, la investigación basada en encuestas de Quesada se había nutrido del funcionamiento regular de las distintas bibliotecas nacionales, reales o públicas que visitó —en Francia, Madrid, Berlín, Múnich, Dresde o Viena—, pero también de

[37] Los datos los proporciona Groussac (1901).

[38] Manuel Ricardo Trelles (1882).

[39] Quesada (1879: 30).

los modelos de clasificación expuestos por hombres como Jacques Charles Brunet, Leopold Constantin y Eugène Hatin, los cuales discutió y valoró.

De entre todos, el ya generalizado modelo de Brunet sería el propuesto por Quesada para la biblioteca. Su idea era sustituir el antiguo esquema de división por departamentos para implementar uno dividido en cinco secciones: (1) teología, (2) jurisprudencia y ciencias sociales, (3) ciencias y artes, (4) bellas letras o filología y (5) historia. Seguido y finalizado con matices por la administración de Groussac, el modelo inspirado en Brunet imponía además el abandono de los criterios de organización que denominaban ambos bibliotecarios «filosóficos», los cuales atañían a criterios de división moldeados por la diversidad del conocimiento humano. Tanto Quesada como Groussac favorecieron así la adopción del modelo no solo más aceptado entre los países que consideraban cultos, sino también el más práctico para el trabajo en la institución. Los primeros avances de esta organización fueron resultado, pese a todo, más de una cuestión coyuntural que de una plena adopción de las propuestas de Quesada.

Fueron las exposiciones universales y el deseo de los países latinoamericanos de hacerse un lugar en estos certámenes industriales los elementos que posibilitaron la puesta a prueba de las primeras transferencias en el ámbito bibliotecario. Alentada por los deseos cosmopolitas de algunas élites intelectuales, pero ante todo por la intención de atacar las lecturas bárbaras que circulaban en Europa sobre el continente, la exposición de bibliotecas buscó mostrar la producción intelectual de los países, sus estados de «civilización» y modernización, aunque no siempre lograron esquivar las carencias materiales ni tampoco presentar las colecciones con base en criterios razonados. Durante la gestión de Quesada, la Biblioteca de Buenos Aires participó de dos de estos eventos, la Exposición Centenaria de Filadelfia de 1876 y la Exposición Universal de París de 1878. De entre estos, solo la segunda ocasión permitió exhibir los cambios en la institución.

Arreglada por Nicolás Massa y Ernesto Quesada, la colección conformada para el evento agrupó 227 títulos en 660 volúmenes. Además de duplicar el conjunto presentado en Filadelfia, la colección se ordenó adaptando los criterios de Brunet a los objetivos de la participación y las características de la propia colección, lo que implicó la eliminación de la sección de «teología»